



**GUATEMALA:
NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA**

Informe sobre América Latina No. 39 – 11 de octubre de 2011



GUATEMALA: NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA

Informe sobre América Latina N°39 – 11 de octubre de 2011

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	i
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. LOS ZETAS	2
III.VIOLENCIA Y ESTUPEFACIENTES	7
IV.EL VACÍO INSTITUCIONAL.....	9
A. EL LEGADO DEL AUTORITARISMO.....	9
B. LA APLICACIÓN DE LA LEY Y LA JUSTICIA.....	10
V. REDES GUATEMALTECAS.....	14
A. NARCOTRAFICANTES SOCIALMENTE ACEPTABLES	14
B. RESULTADOS MIXTOS	16
C. QUÍMICOS Y AMAPOLA.....	18
D. LOS INTOCABLES	20
VI.CONCLUSIÓN.....	23
APÉNDICES	
A. MAPA DE GUATEMALA	25
B. MAPA DE RUTAS DE TRÁFICO DE COCAÍNA A CENTROAMÉRICA	26
C. COCAÍNA SUDAMERICANA TRANSPORTADA POR EL CORREDOR MÉXICO-CENTROAMÉRICA.....	27
D. SOBRE INTERNATIONAL CRISIS GROUP	28
E. INFORMES DE CRISIS GROUP Y BOLETINES SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2008	29
F. JUNTA DIRECTIVA DE CRISIS GROUP	30

GUATEMALA: NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA

RESUMEN EJECUTIVO

En Guatemala, la sangrienta irrupción de carteles dirigidos por mexicanos constituye el capítulo más reciente de un círculo vicioso de violencia y fracaso institucional. La geografía ha convertido al país – que está en la mitad del camino entre Colombia y Estados Unidos – en una de las intersecciones más concurridas para las drogas ilícitas. La cocaína (y ahora los ingredientes para las drogas sintéticas) entra por aire, tierra y mar. De ahí sigue a México, camino a Estados Unidos. El altiplano fresco ofrece un clima ideal para el cultivo de amapola. Debido a la laxa normatividad y a una larga historia de contrabando, las armas abundan. Una población empobrecida y subempleada es una buena fuente de reclutas. El ganador de las elecciones presidenciales de noviembre tendrá que enfrentar el problema de las inequidades sociales y económicas al igual que la violencia y la corrupción que asociada con el narcotráfico. Es necesario el apoyo decidido de la comunidad internacional para asegurar que estos retos no abrumen a una democracia que aún no se recupera de las décadas de violencia política y gobiernos militares.

Las pandillas y la delincuencia común florecen bajo las mismas condiciones que les permiten a los narcotraficantes operar con flagrante impunidad: fuerzas policiales desmoralizadas, un sistema judicial que suele ser objeto de intimidaciones y corrupción y una población que desconfa de las entidades encargadas de aplicar la ley, a tal punto que los ricos dependen de fuerzas de seguridad privada en tanto que los pobres se arman para formar grupos de autodefensa. Durante la última década, la tasa de homicidios ha duplicado, pasando de veinte a más de cuarenta por 100.000 habitantes. Mientras que los traficantes contribuyen a la ola de delincuencia en regiones fronterizas y a lo largo de los corredores del narcotráfico, pandillas de jóvenes siembran el terror en los barrios de Ciudad de Guatemala.

Las atrocidades perpetradas por los Zetas, la organización criminal mexicana más violenta, que decapita y descuartiza a sus víctimas para lograr el mayor impacto, generan el mayor número de titulares. Los violentos carteles de la droga, sin embargo, son sólo una manifestación de las bandas y asociaciones clandestinas que llevan mucho tiempo dominando a la sociedad guatemalteca y paralizando

sus instituciones. Cómo cambiar esta dinámica será uno de los retos más difíciles para el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre. Tanto Otto Pérez Molina como Manuel Baldizón han prometido una postura fuerte contra la delincuencia. Sin embargo, es muy probable que un enfoque de mano dura que no incluya una estrategia para fomentar el estado de derecho, sólo arroje resultados esporádicos y a corto plazo.

En décadas anteriores, el mismo Estado fue el violador más prolífico de derechos humanos. Durante el conflicto que duró 36 años y que terminó en los acuerdos de paz de 1996, las fuerzas armadas asesinaron a opositores en zonas urbanas y arrasaron con poblaciones ante la sospecha de que éstas servían como escondites para las fuerzas guerrilleras. Justo cuando Guatemala se recuperaba de años de violencia política, el control del narcotráfico sudamericano se desplazaba de Colombia hacia México. El aumento en la interdicción en el Caribe y el arresto de líderes de carteles colombianos les permitió a los traficantes mexicanos comenzar a tomar las riendas de la distribución de estupefacientes a finales de la década de 1990. La ofensiva contra el narcotráfico lanzada por el presidente mexicano Felipe Calderón después de 2006, obligó a los narcotraficantes a importar mayores cantidades de drogas a Centroamérica para luego transportarla hacia el norte por tierra.

El envío de más estupefacientes a través de Centroamérica ha tenido un efecto multiplicador sobre las actividades ilegales. La violencia es especialmente intensa en los departamentos costeros y fronterizos, donde los narcotraficantes y las pandillas han diversificado sus actividades para incluir, entre otras, el microtráfico, la prostitución, la extorsión y el secuestro.

En algunas regiones, los narcotraficantes se han convertido en empresarios prominentes, con negocios lícitos e ilícitos. Ellos participan en eventos comunitarios, distribuyen regalos a los necesitados y financian campañas políticas. Sus secuaces fuertemente armados ofrecen protección contra otras pandillas y la delincuencia común. Aquellos que financian el cultivo de amapola ofrecen a comunidades indígenas empobrecidas ingresos monetarios superiores a cualquiera que hayan conocido antes. Pero estos

grupos de narcotráfico a nivel nacional operan también con impunidad a la hora de tomar tierras e intimidar o eliminar a competidores. La policía y las autoridades judiciales locales oponen poca resistencia, al carecer de recursos y ser objeto de una desconfianza generalizada.

Hay indicios de progreso. La fiscal general está reabriendo investigaciones sobre abusos de derechos humanos a la vez que toma medidas severas contra la actual amenaza que presenta el crimen organizado. Una activista veterana de derechos humanos fue nombrada por el gobierno saliente para reformar la policía. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una iniciativa conjunta entre la ONU y Guatemala, está impulsando procesos penales de alto perfil. Los donantes están financiando unidades previamente depuradas, brindando nuevas herramientas de investigación y construyendo nuevas instalaciones judiciales. Además, durante el último año las autoridades centroamericanas, con apoyo internacional, han arrestado a media docena de narcotraficantes guatemaltecos de alto perfil que serán extraditados a Estados Unidos.

No obstante, ponerle fin a la impunidad que ha permitido el florecimiento de redes de narcotráfico y otras organizaciones ilegales implicará un esfuerzo multidimensional a largo plazo. Para sostener los avances recientes y sentar las bases para una reforma sostenible es urgente que:

- el nuevo Presidente le permita a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, terminar su mandato de cuatro años, le dé su pleno respaldo a la comisionada para la reforma policial, Helen Mack, y respalde los esfuerzos de la CICIG para iniciar procesos penales de alto perfil y fortalecer las capacidades de la justicia penal;
- líderes políticos y empresariales trabajen juntos tanto para aumentar las rentas públicas para la lucha contra la delincuencia y los programas sociales, como para idear iniciativas anticorrupción que obliguen a los funcionarios a responder cuando utilicen fondos públicos;
- los líderes regionales aumenten la cooperación para interceptar cargamentos de narcóticos ilícitos y dismantelar grupos criminales transnacionales a través de entidades como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);
- Estados Unidos y otros países consumidores brinden ayuda financiera acorde con su interés nacional en frenar el narcotráfico y con objeto no sólo de arrestar narcotraficantes, sino también de construir instituciones fuertes, sujetas a mecanismos democráticos de rendición de cuentas; y
- los líderes internacionales abran un debate serio sobre políticas antidrogas, incluyendo estrategias diseñadas para reducir tanto la producción como el consumo. Es tiempo de reevaluar las políticas que no han logrado ni aliviar el sufrimiento causado por la drogadicción ni reducir la corrupción y la violencia vinculadas a la producción y tráfico de estupefacientes.

**Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas,
11 de octubre de 2011**

GUATEMALA: NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos cinco años, América Central se ha convertido en la principal ruta de narcóticos ilegales enviados por productores sudamericanos hacia consumidores en Estados Unidos. Como el control más eficaz dificulta el envío directo de drogas a Estados Unidos y México, los traficantes están canalizando el contrabando por tierra a través de un istmo donde se encuentran algunos de los países más pobres del hemisferio. En Centroamérica, las organizaciones internacionales de narcotráfico han encontrado el entorno perfecto para sus actividades ilícitas: una impunidad rampante, abundantes armas y una fuente constante de reclutas entre jóvenes que tienen pocas esperanzas de mejorar sus vidas a través de la educación y el empleo estable.

Guatemala, el país que está en el extremo norte de Centroamérica, es la puerta de entrada para los estupefacientes que viajan por tierra a México. A medida que más estupefacientes pasan por su territorio, mueren más guatemaltecos a causa de delitos vinculados a la droga. Durante la década pasada, el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. De manera trágica, estos países que sobrevivieron los conflictos armados y/o la represión militar durante la Guerra Fría ahora padecen las vicisitudes de una batalla del siglo XXI contra el crimen organizado.¹

Las autoridades guatemaltecas, con la ayuda de donantes, están logrando algunos avances frente a los delincuentes y las redes clandestinas que infiltran las instituciones de gobierno. Una fiscal activista, Claudia Paz y Paz, está al frente de los casos contra los delincuentes organizados de hoy y los autores de abusos masivos de derechos humanos del pasado. Cuenta con el apoyo de una iniciativa única de la ONU y Guatemala – la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – que trabaja para investigar y judicilizar a los grupos clandestinos que pene-

tran el Estado.² Una reconocida defensora de derechos humanos, Helen Mack, ha asumido el cargo de comisionada para la reforma policial, encargada de idear una estrategia para crear fuerzas civiles de seguridad más eficientes, honestas y profesionales.

Pero el cambio institucional se ve obstaculizado por la naturaleza caótica de la política guatemalteca. Las elecciones son competitivas pero polarizantes; los partidos son personalistas, pues rara vez duran más de uno o dos ciclos electorales. Lo más perturbador, en un país inundado de dinero procedente del narcotráfico, es no existe una mínima supervisión de la recaudación de fondos para las campañas que se encuentran entre las más costosas en el hemisferio occidental. Los políticos tienen pocas razones para apoyar un programa de reformas, sobre todo uno que tal vez vaya en desmedro de los intereses de sus donantes anónimos.³

Guatemala no es un estado ni fallido ni al borde del colapso. Celebra elecciones regulares a nivel local y nacional. Tiene escuelas, universidades, clínicas y hospitales públicos que funcionan. Automóviles particulares y autobuses atiborran las calles de Ciudad de Guatemala en la hora pico mientras que camiones articulados que transportan productos agrícolas o mercancía llenan las carreteras sinuosas que atraviesan las montañas al conectar la capital con el interior. Las clases medias y altas hacen compras en almacenes de cadena estadounidenses y europeos en centros comerciales climatizados mientras que las hacinadas plazas de mercado ofrecen un espacio de compras para aquellos con menores ingresos. La economía, pese a una disminución en 2009, ha crecido a una tasa promedio de 3,3 por ciento a lo largo de la última década.⁴

Según los criterios del Banco Mundial, Guatemala es un país de ingreso medio-bajo, aunque su comercio vibrante y la prosperidad de sus clases altas ocultan inequidades profundas que han dejado a la mitad de la población ge-

¹ Véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°33, *Guatemala: asfixiada por el crimen y la impunidad*, 22 de junio de 2010.

² Véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°36, *Caminar sin muletas: un Balance de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala*, 31 de mayo de 2011.

³ Véase Crisis Group, boletín informativo sobre América Latina N°24, *Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia*, 16 de junio de 2011.

⁴ Banco Mundial (<http://data.worldbank.org>).

neral, y a la mayor parte de la población indígena, viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con una existencia precaria como vendedores ambulantes, trabajadores manuales o agricultores de subsistencia. En las comunidades del altiplano, a unas cuantas horas de la capital, la mayoría de los niños sufren de malnutrición.⁵ Uno de cada cuatro adultos no sabe ni leer ni escribir, y 42 de cada 1.000 niños mueren antes de los cinco años de edad, la mayor tasa de mortalidad en el hemisferio después de Haití y Bolivia.⁶

Los más adinerados han gozado durante mucho tiempo de bajas tasas de tributación individual y exenciones generosas, mientras que el sector público a duras penas consigue los recursos para brindar servicios básicos, combatir la corrupción y la delincuencia y promover y proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a vivir sin temor a la violencia.

Este informe examina las organizaciones de narcotráfico que operan en Guatemala y analiza el vacío institucional que les ha permitido prosperar. Se basa principalmente en entrevistas extensas con fiscales, policías, funcionarios locales y nacionales, expertos y activistas. El trabajo de campo se llevó a cabo en la capital y en tres departamentos atravesados por importantes rutas de la droga: Alta Verapaz, Izabal y San Marcos. Primero, el informe explora la amenaza que presentan los carteles mexicanos, sobre todo el grupo violento conocido como los Zetas. Luego aborda la naturaleza y la magnitud de la violencia y las fallas institucionales que han permitido a los delincuentes operar con impunidad. Por último, examina las mafias compuestas por familias cuyas actividades tal vez no salgan en los titulares pero cuyo predominio en la política local y los negocios podría constituir la mayor amenaza a la democracia guatemalteca.

II. LOS ZETAS

La masacre en un sitio remoto en el norte de Guatemala fue macabra, incluso para un país que ha estado sujeto a una violencia extrema durante mucho tiempo. La mañana del 15 de mayo algunos vecinos llegaron a la finca Los Cocos para comprar leche fresca y encontraron los cuerpos de 27 trabajadores agrícolas, incluyendo a dos mujeres y tres adolescentes, tirados en un potrero. Todos, salvo dos, habían sido degollados.⁷ Un sobreviviente, quien dijo que se había hecho pasar por muerto para luego esconderse, les dijo a los reporteros que los atacantes mataron a los trabajadores uno por uno, en una jornada que comenzó a las siete de la noche que no terminó sino hasta las tres de la mañana del día siguiente. En la pared de la casa, escrito con sangre, dejaron un mensaje para el propietario: “¿Qué onda Otto Salguero? Te voy a encontrar y te voy a dejar así”.⁸ Fue firmado por “Z-200”.⁹

Las autoridades creen que los atacantes estaban tratando de extorsionar o de vengarse a raíz de un negocio de narcotráfico que había salido mal. Tanto Salguero como los trabajadores provienen del departamento de Izabal, sede de los traficantes guatemaltecos que ahora se disputan el control de las rutas de la droga con los Zetas, el grupo más despiadado.¹⁰

El Gobierno reaccionó rápidamente ante los asesinatos, enviando tropas a Petén bajo un decreto de estado de sitio, otorgándole al ejército la facultad de efectuar registros, decomisar armas y limitar las libertades de reunión y circulación. Pronto encontraron un campamento con vehículos y armas, usado por los entre veinte y cuarenta integrantes de los Zetas supuestamente responsables de la masacre. En los cuatro días siguientes se anunció la captura, en el departamento de Alta Verapaz, de uno de los hombres que, se cree, dirigió la masacre en Los Cocos y el asesinato y

⁷ “Ven manos de zetas en la masacre de 27”, *Siglo21* (en línea), 16 de mayo de 2011; e “Identifican a 14 víctimas de masacre en Petén”, Noticias de Guatemala (noticias.com.gt), 17 de mayo de 2011.

⁸ “Sobreviviente de masacre fingió estar muerto tras ser apuñalado”, Agence France-Presse, 16 de mayo de 2011. Véase también “Lo que provocó el Estado de Sitio en Petén”, government ministry (www.mingob.gob.gt), 20 de mayo de 2011.

⁹ Jorge Carrasco Araizaga, J. Jesus Esquivel, “Los Zetas”, al Ataque”, *Proceso*, 5 de junio de 2011, p. 15. Según esta revista mexicana, funcionarios mexicanos, guatemaltecos y estadounidenses han identificado Z-200 como un mexicano de alrededor de 35 años del Estado de Veracruz. Algunos funcionarios creen que el nombre identifica a los Zetas que operan en Guatemala, no a un líder particular. Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 25 de agosto de 2011.

¹⁰ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2011.

⁵ “Guatemala Global Health Initiative Strategy”, Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. 11 de diciembre de 2010, p. 4.

⁶ Banco Mundial (<http://data.worldbank.org>).

la decapitación de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron hallados unos días antes en la misma zona. Hugo Álvaro Gómez Vásquez fue identificado como un antiguo integrante de las fuerzas especiales guatemaltecas (los Kaibiles) e integrante de los Zetas, que se hacía llamar “Bruja”.¹¹

El arresto rápido no detuvo la campaña de terror. Una semana después de que las autoridades detuvieron al presunto comandante de los Zetas, el grupo declaró su responsabilidad por otro macabro asesinato, esta vez en Cobán, la capital de Alta Verapaz, donde las autoridades habían impuesto un estado de sitio durante 60 días a principios de 2011 en aras de dispersar y dismantelar el cartel. El cuerpo desmembrado de Allan Stowlinsky Vidaurre, asistente de fiscal, fue hallado en cuatro bolsas plásticas dejadas frente a la gobernación, mientras que su cabeza fue dejada en una quinta bolsa en una plaza de mercado cercana. Una nota firmada con Z-200 advirtió: “Esto es para todos los que se andan equivocando con Z-200... Les dije que uno a uno los iba ir matando...”¹²

Nuevamente la policía y los fiscales reaccionaron rápidamente. Menos de dos semanas después del hallazgo del cuerpo de Stowlinsky, arrestaron a catorce supuestos integrantes de los Zetas en la ciudad de Cobán, incluyendo un mexicano cuyo teléfono móvil tenía una videograbación del asesinato del fiscal auxiliar. Durante el operativo, las autoridades también incautaron un pequeño arsenal de armas.¹³

Para septiembre, 65 integrantes de los Zetas estaban bajo custodia, incluyendo una docena de sospechosos arrestados a mediados de julio en una granja en Ixcán, una municipalidad en El Quiché que colinda con el estado mexicano de Chiapas. La inteligencia guatemalteca ubicó el grupo tras notar “que había movimiento de personas sospechosas y de mercancía de origen mexicano, particularmente cerveza”. Aparentemente estaban alistándose para festejar: las autoridades también hallaron caballos de carreras y gallos de pelea en la finca. Los medios llamaron el asunto las “narco fiestas”.¹⁴

Según un funcionario del Ministerio Público (MP), aquellos que fueron arrestados son operarios de los Zetas que enfrentarán juicio en Guatemala por una variedad de cargos que incluyen desde asesinato hasta porte ilegal de armas de fuego y asociación ilícita.¹⁵ Pero las autoridades reconocen que están lejos de impedir a los Zetas y otros narcotraficantes mexicanos que lleven a Centroamérica las guerras de carteles que han cobrado decenas de miles de vidas al interior de México. “Los hemos obligado a dispersarse desde Petén hacia otros departamentos”, dijo un asesor presidencial. “Pero el problema no se trata solamente de los Zetas ni solamente de Petén. Estos grupos tienen recursos casi inagotables y una abundancia de potenciales reclutas”.¹⁶

Sin embargo, líderes políticos de diferentes corrientes muestran pocos deseos de extender los operativos militares a otros departamentos. Los operativos de seguridad contra los Zetas generan dificultades de presupuesto en un momento en que el Presidente y el Congreso ya están inmersos en una batalla sobre los niveles crecientes de la deuda pública. El presidente Álvaro Colom dijo en mayo de 2011 que los operativos en Petén le costaron al Estado entre 1 y 1,5 millones de quetzales (entre \$127.000 y \$190.000 aproximadamente) por día.¹⁷ Su gobierno redujo el estado de sitio a un estado de alarma menos drástico a mediados de agosto, y un asesor dijo que el gobierno esperaba pronto devolver el departamento a la normalidad.¹⁸

La oposición a los prolongados operativos militares contra los traficantes va más allá de su costo económico. Aún están vivos los recuerdos de las atrocidades militares cometidas durante el conflicto armado que azotó a toda Guatemala entre 1960 y 1996. Además, muchos consideran que el despliegue de tropas que ordenó el presidente Felipe Calderón para luchar contra el crimen organizado en México es un error que ha generado un número total de muertos que supera los 37.000 durante los últimos cinco años.¹⁹ “México es un desastre”, dijo el asesor presidencial. “No están ganando la guerra; sólo generan más violencia. No queremos cometer el mismo error”.²⁰

¹¹ “Imputan cinco delitos a presunto responsable de masacre en Guatemala”, Associated Press, 21 de mayo de 2011; y “MP acusa a comandante Bruja por triple asesinato en Petén”, *Prensa Libre*, 25 de agosto de 2011.

¹² “Hallan cadáver descuartizado de un fiscal en Cobán”, *Siglo21* (online), 24 de mayo de 2011. En Guatemala, los fiscales auxiliares hacen trabajo de investigación, lo cual implica reunir pruebas y entrevistar a los testigos.

¹³ “Mexicano tenía celular con video del asesinato de fiscal”, *Siglo21*, 4 de junio de 2011.

¹⁴ “Autoridades frustran narcofiesta en Quiché y capturan a 11”, *Prensa Libre*, 11 de julio de 2011.

¹⁵ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2011.

¹⁶ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹⁷ Eddy Cornado, “Llama ignorantes quienes piden estado de sitio nacional”, *Siglo21*, 26 de mayo de 2011.

¹⁸ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹⁹ El periódico *La Reforma* de México tiene una base de datos en línea sobre asesinatos vinculados a los grupos de narcotráfico. Para el 4 de octubre de 2011, había registrado 9.742 ejecuciones características del narcotráfico en 2011, subiendo a 37.513 el total desde 2006. Véase *Ejecutómetro 2011* (<http://gruporeforma.reforma.com>).

²⁰ Entrevista de Crisis Group, 17 de mayo de 2011.

Pero la irrupción violenta de los Zetas en territorio guatemalteco hace más urgente la batalla por contener el crimen organizado. Las matanzas en Los Cocos y el asesinato del asistente del fiscal de Cobán marcaron un paso peligroso de conflictos intestinos entre los mismos grupos de narcotraficantes a ataques diseñados para sembrar terror entre civiles y funcionarios de gobierno.

Los Zetas ocuparon los titulares en Guatemala en 2008, cuando mataron al traficante guatemalteco Juancho León, un antiguo asociado de la familia Lorenzana. El asesinato ocurrió en un tiroteo en un balneario cerca de Río Hondo, en el departamento nororiental de Zacapa, que dejó once personas muertas.²¹ Ocho meses después, los Zetas y los traficantes guatemaltecos libraron una batalla con fusiles de asalto y granadas por las calles de Agua Zarca, una población que está cerca de la frontera mexicana en el departamento occidental de Huehuetenango. Ese enfrentamiento dejó al menos 17 muertos, aunque la cifra pudo haber sido mayor: los medios de prensa informaron que un helicóptero se llevó a algunos de los muertos y heridos antes de que llegara la policía.²²

Las relaciones relativamente pacíficas que reinaban anteriormente entre las mafias de la droga controladas por familias se desbarató con la muerte de León, dijo Edgar Gutiérrez, ex canciller.²³ Gutiérrez y otros expertos creen que narcotraficantes guatemaltecos tal vez hayan invitado a los Zetas al país para eliminar a León, cuya organización (conocida como “Los Juanes” o “Los Leones”) estaba conformada por integrantes considerados “tumbadores” (delincuentes dedicados al hurto de drogas) que robaban cargamentos a otras organizaciones.²⁴ Pero los Zetas, antiguos sicarios del Cartel del Golfo que se independizaron de sus jefes en 2010, no se fueron después de cumplir su misión. “Los Zetas decidieron quedarse”, dijo Gutiérrez, “Son huéspedes indeseados, compitiendo con sus antiguos anfitriones”.²⁵

¿Cuántos integrantes de los Zetas están en Guatemala y dónde operan? Gutiérrez calcula que el grupo es de 500 aproximadamente y que la mayoría son de nacionalidad guatemalteca. Aquellos que operan en el país son una “franquicia” del cartel mexicano, no una fuerza invasora del norte, dijo él. Bajo los crecientes hostigamientos de las autoridades en Alta Verapaz y Petén durante los últimos seis meses, según Gutiérrez, el grupo se ha dispersado y se ha extendido hacia el oriente y el suroccidente, aumentando su control de los departamentos fronterizos.²⁶

Otros creen que nunca ha habido más de unos 200 Zetas en Guatemala.²⁷ Un cable diplomático de Estados Unidos de febrero de 2009 calculó que en Cobán había unos 100.²⁸ Aunque unos cuantos centenares tal vez no parezca un gran número, la temible reputación y los amplios recursos financieros de los Zetas los convierten en adversarios formidables para las mal dotadas fuerzas de seguridad guatemaltecas y sus rivales en el tráfico de drogas ilegales. Fuentes en las regiones fronterizas dijeron que muchos de los narcotraficantes y pandilleros locales ahora afirman ser integrantes de los Zetas, para protegerse e intimidar a los demás.²⁹

En Guatemala, los Zetas compiten con narcotraficantes locales vinculados con los carteles de Sinaloa y del Golfo. Su vendetta contra los antiguos asociados del cartel del Golfo parece especialmente virulenta. Poco después de la masacre en Los Cocos, mantas con mensajes escritos a mano firmados por Z-200 aparecieron en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango y Huehuetenango. Una de éstas declaraba: “La guerra no es contra la población civil, ni con el Gobierno, mucho menos con la prensa... es contra aquellas personas que trabajan con el Golfo”. Pero, el mensaje finalizó con esta advertencia: “Prensa bájenle tanta mamada antes de que la guerra sea contra ustedes”.³⁰ Pese a las amenazas, los periódicos y

²¹ Luis Ángel Sas, “PNC señala que ‘Juancho’ León fue emboscado”, *elPeriódico*, 29 de marzo de 2008.

²² El diario *elPeriódico* (15 de diciembre de 2008) citó a testigos que contaban que llegó un helicóptero equipado de implementos médicos y suero sanguíneo para tratar a los heridos. Véase también Velia Jaramillo, “Alarma en el Sur”, *Proceso*, 1° de febrero de 2009.

²³ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 24 de abril de 2011. Gutiérrez también fue secretario de análisis estratégico del gobierno del presidente Portillo. Actualmente es el director de la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América Latina (DESC).

²⁴ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, abril y mayo de 2011. Véase también Julie López, “Narcotráfico: El ocaso de los Lorenzana”, *Plaza Pública* (www.plazapublica.com.gt), 29 de abril de 2011.

²⁵ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 24 de abril de 2011.

²⁶ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Gutiérrez, 26 de septiembre de 2011. Véase también Edgar Gutiérrez, “Guatemala hoy: La reconfiguración cooptada sobre instituciones fallidas”, en L.J. Garay y Eduardo Salcedo-Albarán (eds.), *Narcotráfico, Corrupción y Estado: Cómo las redes ilícitas reconfiguran instituciones en Colombia, México y Guatemala* (Bogotá y México, en proceso de publicación).

²⁷ Entrevista de Crisis Group, funcionario del ministerio público, 14 de septiembre de 2011.

²⁸ Embajada de los EE.UU. en la Ciudad de Guatemala, Cable 09GUATEMALA106, con fecha del 6 de febrero de 2009, disponible en Wikileaks (www.wikileaks.ch).

²⁹ Entrevistas de Crisis Group, Cobán, 3-4 de mayo; Puerto Barrios, 6-7 de mayo; y San Marcos, 11-12 de mayo de 2011.

³⁰ Julio Revolorio, “‘Zetas’ dejan mantas advirtiéndole a la prensa limitar su cobertura”, *elPeriódico*, 22 de mayo de 2011. Entrevistas de Crisis Group, funcionarios del ministerio público y de Presidencia, Ciudad de Guatemala, 25 y 30 de agosto de 2011.

las cadenas de televisión nacionales siguen reportando sobre los Zetas sin auto censura aparente, aunque los medios locales deben actuar con mucho más cuidado.

La mayor presencia de los Zetas en Guatemala probablemente resulta de una combinación de factores: el aumento de las presiones en México y Colombia y las atractivas y lucrativas rutas de la droga a través de Centroamérica. Mauricio Boraschi, el comisionado de antinarcóticos en Costa Rica, dice que las medidas estrictas adoptadas por México y Colombia han “generado el famoso efecto globo” según el cual la represión del narcotráfico en una región lo obliga a surgir en otra.³¹ Los Zetas y otras organizaciones mexicanas también son atraídas por el corredor de la droga que se extiende desde Izabal, en el oriente de Guatemala donde el país hace frontera con Honduras, hasta El Salvador pasando por los departamentos centrales de Alta Verapaz y al norte hacia Petén, que colinda con los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche. Ellos además han peleado contra otros grupos de narcotraficantes por el control del departamento de Huehuetenango, que limita con México por el occidente.³²

Los Zetas, a diferencia de las redes establecidas del narcotráfico en Guatemala, no son simplemente *transportistas*. Son una mafia diversificada que dirige varias empresas criminales que incluyen la extorsión, el secuestro, el sicariato, la prostitución y la trata de personas.³³ También usan su superioridad en armas para robar cargamentos de droga y obligar a los grupos guatemaltecos a pagar dinero a cambio de protección. “Los Zetas son en esencia extorsionistas o *tumbadores* (ladrones de droga)”, dijo Miguel Castillo, un politólogo de la Universidad Francisco Marroquín.³⁴ Eso los hace más volátiles que los grupos tradicionales, los cuales han cultivado el apoyo de sus comunidades, evitando así la violencia que podría atraer demasiada atención y perturbar su negocio.

Guatemala ya no es sólo una estación de paso para las drogas que viajan desde Colombia hacia Estados Unidos, sino cada vez más una zona de preparación y almacenamiento de drogas que esperan un camino seguro a México.³⁵ Esto también aumenta las tensiones entre narcotraficantes, pues incrementa el riesgo de que los cargamentos

sean hurtados por competidores o decomisados por las autoridades. También implica que algunos narcotraficantes guatemaltecos están emulando a los Zetas al diversificar sus actividades para incluir negocios como el contrabando de migrantes, la extorsión y el secuestro, los cuales tienden a ser más violentos que el mismo narcotráfico.³⁶

Hay antiguos integrantes de los Kaibiles que ahora son miembros de los Zetas, como Gómez Vásquez. Los Kaibiles comparten un perfil militar con los fundadores de los Zetas, desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano que fueron contratados inicialmente como ejecutores por el cartel del Golfo en la década de 1990. Su relación con los Zetas antecede la aparición del grupo mexicano en Guatemala. En septiembre de 2005, las autoridades mexicanas arrestaron a seis antiguos kaibiles fuertemente armados en Chiapas, uno de los estados mexicanos que limita con Petén.³⁷ El entonces ministro de defensa mexicano, Clemente Vegas, dijo que los Zetas estaban contratando a los Kaibiles para ayudar a entrenar a nuevos integrantes y reponer sus filas en un momento en que tenían dificultades para conseguir suficientes reclutas entre las fuerzas armadas mexicanas.³⁸

Al reclutar a los Kaibiles, los Zetas consiguen efectivos que han recibido entrenamiento intensivo en logística, armamento pesado y guerra en la selva. “Son hombres capaces de quedarse parados durante doce horas sin pestañear”, dijo el coronel retirado del ejército Mario Mérida, director de inteligencia militar. “Pero no son útiles para el ejército después de las edades de 25 a 27 y se convierten en un recurso humano apetezible para las empresas de seguridad privada – o para el crimen organizado”.³⁹ El modo operativo de los Zetas refleja su entrenamiento militar. A aproximadamente 15 km del sitio de la masacre en Petén, las autoridades descubrieron un campamento dotado de plantas eléctricas, un televisor, uniformes del ejército guatemalteco y un alijo con dos docenas de fusiles de asalto. “Actúan como una fuerza invasora”, dijo Castillo. “Traen todo ellos mismos para no tener que depender de nadie”.⁴⁰

La contratación de antiguos kaibiles también les permite a los Zetas adquirir los servicios de combatientes que son legendarios o notorios por su propio mérito. Una de las

³¹ Alex Leff, “Mexican cartels carve bloody swath through Central America”, *Global Post*, 4 de enero de 2011.

³² Véase Informe de Crisis Group, *Guatemala: asfixiada por el crimen y la impunidad*, op. cit., pp. 15-16.

³³ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2011.

³⁴ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 28 de junio de 2011.

³⁵ Véase Thomas M. Harrigan, “US-Central America Security Cooperation”, testimonio ante el Grupo Congresional del Senado de los EE.UU. sobre el Control Internacional de Narcóticos, 25 de mayo de 2011.

³⁶ Entrevistas de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011; funcionario estadounidense, Washington DC, 26 de septiembre de 2011.

³⁷ Jorge Alejandro Medellín, “Indagan nexos entre kaibiles y ‘Los Zetas’”, *El Universal* (en línea), 28 de septiembre de 2005.

³⁸ Citado en Colleen W. Cook, “Mexico’s Drug Cartels”, Congressional Research Service, 16 de octubre de 2007, pp. 7-8.

³⁹ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 27 de abril de 2011.

⁴⁰ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 28 de junio de 2011.

peores atrocidades que se cometieron durante el conflicto interno que duró décadas en Guatemala ocurrió en La Libertad, el mismo municipio donde está ubicado Los Cocos. En diciembre de 1982, masacraron a los habitantes de la población de Dos Erres, incluyendo a mujeres y niños pequeños. Trece años después, durante las negociaciones de paz, los expertos forenses descubrieron los restos de 162 pobladores en un depósito de agua abandonado.⁴¹ Un total de 223 cuerpos se han hallado hasta la fecha en fosas comunes cerca del sitio de la masacre.⁴²

Los métodos empleados en Los Cocos y en Dos Erres presentaban similitudes inquietantes. Sobrevivientes de ambas masacres dijeron que los atacantes obraban metódicamente, interrogando y matando a cada víctima. Las técnicas empleadas por los Zetas, según lo que escribe Iduvina Hernández, una activista de derechos humanos que dirige el proyecto Seguridad en Democracia (SEDEM), son las mismas que se les enseñaron a las tropas élites guatemaltecas durante el conflicto armado: “inmovilización con las manos hacia atrás en un amarrado que une pies y manos, tortura individual en busca de información, ejecución paulatina... hasta acabar con el grupo”.⁴³ Claudia Paz y Paz, la fiscal general, ha dicho que Guatemala debe revisar la manera en que el ejército recluta y entrena a los kaibiles y quizá reconsiderar la necesidad de las fuerzas especiales del ejército. “No podemos separar lo que está ocurriendo ahora de lo que ocurrió durante la guerra y cómo estas estructuras fueron entrenadas para generar terror”, dijo Paz y Paz en una entrevista en televisión.⁴⁴ Quince años después de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala está comenzando a enjuiciar a aquellos responsables de ordenar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Paz y Paz es la primera fiscal general que ha promovido la detención de un ex integrante de la cúpula militar por las atrocidades cometidas durante la campaña de contrainsurgencia. El 17 de junio de 2011, la policía arrestó al general retirado Héctor López, de 81 años, por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. López ejerció el cargo de jefe de personal del ejército a principios de la década de 1980. El

2 de agosto, un “Tribunal de Alto Impacto” condenó a cuatro antiguos soldados de las fuerzas especiales a 30 años de prisión por cada una de las víctimas asesinadas en Dos Erres, implicando así condenas de más de 6.000 años.⁴⁵

Sin embargo, aún se trata de casos aislados. El clima de impunidad que permitió que aquellos responsables de graves violaciones de derechos humanos escaparan de la justicia durante más de tres décadas, permite hoy en día a las figuras del crimen organizado evitar ser enjuiciados. Pese al final del gobierno militar, y la valentía de los policías, fiscales y jueces individuales, los activistas de derechos humanos dicen que Guatemala sigue siendo un país donde la justicia está sujeta a la ley de “plata o plomo”. “Las causas de la delincuencia y la violencia en Guatemala son múltiples”, dijo Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización de derechos humanos que monitorea los homicidios. “Pero la razón fundamental es la debilidad del Estado”.⁴⁶

⁴¹ Véase “Guatemala: Memoria del Silencio”, un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, patrocinada por la ONU. La versión en español del informe incluye una descripción de la masacre de Dos Erres, Anexo I, vol. 1, Caso 31, la cual está disponible en <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no31.html>.

⁴² Rosario Orellana, “Inicia juicio contra 4 presuntos responsables de masacre Dos Erres”, *el Periódico*, 25 de julio de 2011.

⁴³ Iduvina Hernández, “Cría kaibiles y te crecerán los Zetas”, *Plaza Pública*, 20 de mayo de 2011. Además, entrevista de Crisis Group, Iduvina Hernández, Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2011.

⁴⁴ Video, CNN México, 16 de junio de 2011, <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/06/16/los-zetas-obtienen-el-poder-por-medio-del-terror-fiscal-de-guatemala>.

⁴⁵ Emily Willard y Laura Perkins, “Four Kaibiles sentenced to 6,060 years each for Dos Erres massacre”, sin editar: The National Security Archive (El Archivo de Seguridad Nacional, nsarchive.wordpress.com), 4 de agosto de 2011. También han sido arrestados dos antiguos kaibiles en Canadá y los EE.UU. Véase Kate Doyle, Jesse Franzblau y Emily Willard, “Ex-Kaibil officer connected to Dos Erres massacre arrested in Alberta, Canada”, The National Security Archive (El Archivo de Seguridad Nacional, www.gwu.edu/~nsarchiv), 20 de enero de 2011.

⁴⁶ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 27 de abril de 2011.

III. VIOLENCIA Y ESTUPEFACIENTES

Durante los últimos cinco años, han muerto violentamente un promedio de 6.000 personas por año en Guatemala, una cifra que alcanza el número de homicidios por año en toda la Unión Europea, cuya población es casi 36 veces mayor.⁴⁷ Las cifras actuales sólo son superadas por lo ocurrido a comienzos de los años 80, en la época más intensa del conflicto interno, cuando las fuerzas armadas bajo el mando de presidentes militares, Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, supuestamente masacraron a poblaciones enteras.⁴⁸ Para poner estas cifras en un contexto regional, la tasa de homicidios en 2010 (42 por 100.000) superaba en 16% a la de Colombia (38 por 100.000) y casi triplicaba la de su país vecino México (16 por 100.000), donde la violencia vinculada al narcotráfico ha crecido rápidamente desde que el presidente Calderón lanzara su campaña contra los carteles hace cinco años.⁴⁹

El Triángulo Norte de Centroamérica – Guatemala, Honduras y El Salvador – es la región más violenta del mundo fuera de las zonas de guerra activa, según Kevin Casas-Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica. “Es una crisis que pone en riesgo los avances muy significativos que la región ha logrado durante las dos últimas décadas”.⁵⁰

⁴⁷ “Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala”, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Guatemala, diciembre de 2007; e “Informe Anual Circunstanciado, Tomo I: Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”, Procuraduría de los Derechos Humanos, enero de 2011. Según la Unión Europea, aproximadamente 6.490 personas fueron asesinadas en los 27 Estados miembro en 2008 (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>).

⁴⁸ Comisión para el Esclarecimiento Histórico, anexo, (<http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>).

⁴⁹ Guatemala no es el país más violento de Centroamérica: En 2010, Honduras y El Salvador tenían tasas de homicidios de más de 70 por 100.000 habitantes. Para la tasa de homicidios en Guatemala véase “Homicidios en Centroamérica”, *La Prensa Gráfica*, 2010. Para los otros países, véase, “PNUD: Latinoamérica es la región con mayores índices de violencia”, *Infolatam*, 15 de septiembre de 2011; “Honduras y El Salvador, los más homicidas”, *ContraPunto* (www.contrapunto.com.sv), 31 de diciembre de 2010. Para Colombia, véase “FORENSIS – Descripción del comportamiento del homicidio”, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, 2010; “América Latina, una de las regiones más violentas, PNUD”, *CNN México*, 14 de septiembre de 2011. Para un análisis de tasas durante la década pasada, véase Carlos A. Mendoza, “El Triángulo Norte de Centro América: El Triángulo de la Muerte, 2000-2010”, *The Black Box* (ca-bi.com/blackbox.com), 23 de julio de 2011.

⁵⁰ “A Conversation on the Future of Central America: The Challenges of Insecurity and Trade”, la Institución Brookings, Washington, DC, 20 de mayo de 2011. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se centró en temas de seguri-

No todas estas muertes se puedan atribuir al narcotráfico. De los 5.960 asesinatos cometidos en el país en 2010, 41 por ciento ocurrieron en el departamento de Guatemala, la región más urbanizada del país, donde los mayores responsables son las pandillas y la delincuencia común.⁵¹ Pero la geografía de los asesinatos fuera de la capital indica que los narcotraficantes, cuyas actividades incluyen también la trata de personas, la extorsión y el secuestro, están detrás de la violencia. Además de Ciudad de Guatemala, los departamentos que han presentado las mayores tasas de homicidios durante los últimos cinco años (Chiquimula, Escuintla, Zacapa, Izabal, Santa Rosa y Petén) están ubicados a lo largo de las costas del país y/o sus fronteras norte y este.⁵²

En un estudio de 2010 sobre la delincuencia en Centroamérica, el Banco Mundial concluyó que la causa principal de la violencia en la región era el narcotráfico, incluso más que otros factores como la prevalencia de pandillas juveniles, la disponibilidad de armas de fuego y el legado de conflictos anteriores. Encontró que los puntos neurálgicos del narcotráfico (generalmente las zonas costeras o fronterizas con un número relativamente alto de incautaciones de narcóticos) tenían tasas de homicidios “que casi doblaban aquellas de zonas del mismo país con narcotráfico de baja intensidad”.⁵³

Esto significa que la actual violencia en Guatemala se concentra en regiones ladinas (donde viven mestizos, no indígenas) y no en los departamentos del interior con poblaciones principalmente indígenas que sufrieron la peor parte de la represión tanto guerrillera como militar durante el conflicto armado.⁵⁴ Los analistas y activistas que trabajan con la población maya, temen que esto podría estar cambiando, pues los narcotraficantes penetran en comunidades remotas donde ofrecen miles de dólares por es-

dad durante su trigésima primera cumbre presidencial en Guatemala en junio de 2011, la cual incluía el diseño de un mecanismo de respuesta subregional y \$100 millones en asistencia de EE.UU.

⁵¹ Cálculo con base en datos del “Informe Anual Circunstanciado”, Procuraduría de los Derechos Humanos, op. cit.; e “Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala”, PNUD, op. cit.
⁵² “Guatemala hacia un Estado Comunitario, Informe de Desarrollo Humano 2009/2010”, PNUD-Guatemala, 2010, p. 369.

⁵³ “Crime and Violence in Central America”, Banco Mundial, septiembre de 2010, p. 22.

⁵⁴ Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), anexo, op. cit., El Quiché padeció casi la mitad de las violaciones de derechos humanos durante la guerra. En contraste, sólo el 1 por ciento de los homicidios cometidos durante los últimos cinco años ocurrieron en El Quiché, según cifras de la PNUD y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

conder camiones o automóviles llenos de drogas que serán posteriormente enviados a México.⁵⁵

El narcotráfico no es el único factor que fomenta la delincuencia, afirman los analistas. La cocaína que va hacia Estados Unidos ha pasado por Centroamérica desde la década de 1970. Pero las cantidades sin precedentes que hoy en día pasan por la región generan enormes utilidades que luego se invierten en otros negocios ilegales que incluyen la venta de armas, la prostitución y bandas dedicadas al secuestro y la extorsión. Algunos de los *transportistas* reciben cocaína a manera de pago, lo cual contribuye al auge del *narco menudeo* (narcotráfico a pequeña escala). “El dinero procedente del narcotráfico tiene un efecto cascada”, dice Francisco Jiménez, antiguo Ministro de Gobernación de Guatemala. “Brinda el capital para toda suerte de otras empresas ilícitas”.⁵⁶

¿Qué hace que Guatemala sea tan importante para los narcotraficantes? La geografía obviamente es clave. Como el país que está en el extremo norte de Centroamérica, es la puerta hacia México para las drogas que llegan procedentes de Sudamérica por aire, tierra y mar. Las drogas que llegan a cualquier parte de Centroamérica tienen que pasar obligatoriamente por Guatemala antes de atravesar México y entrar a Estados Unidos por tierra. Tras alcanzar su nivel máximo en 2008 y 2009, los vuelos que llevaban drogas a Petén y a otras regiones remotas han disminuido, según expertos en Ciudad de Guatemala y Washington, quienes atribuyen la disminución a una mejor interdicción aérea con el apoyo de una flota de helicópteros suministrados por Estados Unidos. Pero parece que los vuelos que transportan droga hacia Honduras van en aumento.⁵⁷ De ahí, los narcotraficantes envían sus cargamentos a través de la frontera hacia los departamentos de Izabal, Zacapa o Chiquimula para luego transportarlos por Alta Verapaz o Petén hacia México.

Desde la década de 1990, la interdicción aérea y marítima por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos ha dificultado el envío de drogas sudamericanas hacia ese país del norte por el Caribe. La mayor presión por parte de las autoridades en Colombia también ha complicado la exportación directa de ese país, obligando a los narcotraficantes a transportar la cocaína por Ecuador, donde se envía por barco a los puertos que quedan más al norte sobre la costa

pacífica, o por Venezuela, donde se envía hacia el norte a lo largo de la costa del Caribe por barco o por avión.⁵⁸

Alrededor del 95 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos llega por Centroamérica y México, según cálculos del gobierno norteamericano.⁵⁹ La cantidad que se envía directamente de Sudamérica a México ha disminuido de manera dramática durante los últimos cinco años con la creciente presión sobre los carteles por parte de las autoridades mexicanas. Mientras que en 2006 el 55 por ciento de los narcóticos ilegales que se dirigían hacia Estados Unidos llegaban a México primero, para 2010 esa cantidad se había reducido a tan sólo un 7 por ciento. Ahora en cambio, los cargamentos de droga llegan primero a Centroamérica. El porcentaje de drogas con destino a Estados Unidos que llega a Honduras ha subido de 7 por ciento a 24 por ciento durante los últimos cinco años; la cantidad que ingresa por Panamá subió de 3 por ciento a 24 por ciento, y por Guatemala de 9 por ciento a 17 por ciento. Alrededor de 12 por ciento llega por Costa Rica, una proporción que permanece relativamente estable. El resto llega a Nicaragua (2 por ciento), Belice (2 por ciento) y El Salvador (1 por ciento) o lugares desconocidos.⁶⁰

A medida que han aumentado las cantidades de drogas ilegales que pasan por el istmo centroamericano, también ha aumentado la competencia por el control de las rutas de la droga. “Centroamérica es un cuello de botella que se encuentra entre los proveedores colombianos y los distribuidores mexicanos”, dijo John Bailey, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington. “El trasbordo es intensamente competitivo y muy lucrativo”.⁶¹ Cuando las drogas se acercan a Estados Unidos, su valor se multiplica. Un kilo de cocaína que vale \$1.000 al por mayor en Colombia alcanza un valor de \$2.500, más del doble del precio inicial, al llegar a Panamá; luego sube a \$6.500 en Costa Rica; \$10.500 en Honduras, y alcanza los \$13.000 al llegar a Guatemala. En Estados Unidos, su destino final, ese kilo vale alrededor de \$30.500 al por mayor, un incremento de más de 3.000 por ciento sobre el precio original en Colombia.⁶²

La geografía no es la única razón por la cual Guatemala y el resto de Centroamérica se han vuelto cruciales para el

⁵⁵ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 5 de mayo de 2011; Izabal, 7 de mayo de 2011; y San Marcos, 11 de mayo de 2011.

⁵⁶ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2011. Jiménez actualmente coordina programas de seguridad y justicia para Interpeace, una organización independiente de construcción de la paz que trabaja con la ONU.

⁵⁷ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 20 de abril de 2011; y Washington, DC, 4 de abril de 2011.

⁵⁸ Véase el mapa en el Apéndice B y la gráfica en el Apéndice C, a continuación. Sobre el aumento en los cargamentos de Venezuela, véase Crisis Group Informe sobre América Latina N°38, *Violencia y política en Venezuela*, 17 de agosto de 2011, p. 7.

⁵⁹ Thomas M. Harrigan, “US-Central America Security Cooperation”, testimonio, op. cit., p. 3.

⁶⁰ Cálculos interinstitucionales del Gobierno de EE.UU. que estaban a disposición de Crisis Group en junio de 2011.

⁶¹ Entrevista de Crisis Group, Washington, DC, 7 de abril de 2011.

⁶² Cálculos de UNODC de 2008 citados en “Crime and Violence”, Banco Mundial, op. cit., p. 38.

narcotráfico. La pobreza le proporciona una vasta población pobre que es fácil de reclutar o intimidar. La mitad de la población guatemalteca vive por debajo de la línea nacional de pobreza y alrededor de la cuarta parte de los guatemaltecos son analfabetas.⁶³ La región también tiene una abundancia de armas tanto legales como ilegales, incluyendo reservas que quedaron después de las guerras civiles. Guatemala impone pocas medidas de control sobre la venta de armas o municiones, por lo cual tiene el mayor índice de civiles propietarios de armas de fuego en América Latina, con una cantidad de armas por cada 100 personas (dieciséis) que es más de dos veces superior a las de sus vecinos El Salvador (siete) u Honduras (seis).⁶⁴

Pero la mayor parte de los analistas coinciden en que la ventaja crucial que ofrece Guatemala tanto al crimen organizado como a la delincuencia común es la carencia de instituciones estatales eficaces. “No es cuestión de estados fallidos”, dijo Carlos Castresana, fiscal español que dirigió la CICIG de 2007 a 2010. “Es cuestión de estados ausentes, pues entre ciudadanos y delincuentes, no hay nada”.⁶⁵

IV. EL VACÍO INSTITUCIONAL

La debilidad institucional no es nueva para Guatemala. Durante buena parte del siglo veinte, las fuerzas armadas dominaban al Estado, operando sin darles mayor importancia a los funcionarios electos, a las autoridades judiciales o a la Constitución. Hay presidentes que son electos, que pueden reorganizar el ejército y la policía y que de hecho los han reorganizado. También hay un Congreso electo que controla el presupuesto. La constitución prevé una rama judicial independiente del ejecutivo y de la rama legislativa. Pero pese al fin del gobierno militar, del conflicto interno y de la entrega de cientos de millones de dólares en ayuda internacional, los líderes guatemaltecos no han logrado construir instituciones políticas y judiciales fuertes. Los guatemaltecos aún esperan recibir su dividendo de paz.

A. EL LEGADO DEL AUTORITARISMO

Hasta la década de 1990, las fuerzas armadas se consideraban la “columna vertebral” del gobierno, supervisando no sólo la seguridad interna sino también operativos que iban desde controles aduaneros y fronterizos hasta acciones cívicas y jornadas de vacunación.⁶⁶ El poder civil siguió estando subordinado a los líderes militares, quienes protegían los intereses de ciertas élites económicas y políticas y hacían caso omiso y reprimían a la empobrecida mayoría maya. Después del golpe de estado maquinado por la CIA, que derrocó a Jacobo Arbenz en 1954, el ejército gobernó a Guatemala de manera directa o indirecta durante cuatro décadas. De los dieciséis presidentes de 1954 a 1996, sólo seis fueron electos (en contiendas violentas que solían ser fraudulentas y excluían a la izquierda), y tres de ellos eran ex militares.⁶⁷

El resultado fue un Estado autoritario que era militarmente despiadado e institucionalmente débil. El embajador de Estados Unidos, Viron Vaky, advirtió en un profético informe de 1968, que el apoyo de su gobierno a la contrainsurgencia del país centroamericano ha “profundizado y perpetuado la propensión de los guatemaltecos a operar por fuera de la ley”. Le eliminación indiscriminada de opositores por parte del ejército, siguió Vaky, “dice en efecto que la ley, la constitución, las instituciones no significan nada, el arma más veloz es lo que cuenta”.⁶⁸ Las

⁶³ Datos del Banco Mundial, op. cit.

⁶⁴ “Crime and Violence”, Banco Mundial, op. cit., p. 75.

⁶⁵ “A Conversation on the Future of Central America”, op. cit. Además, entrevista de Crisis Group, Carlos Castresana, Washington, DC, 22 de mayo de 2011.

⁶⁶ Véase Susanne Jonas, “Democratization through Peace: The Difficult Case of Guatemala”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 42, no. 4, número especial: “Globalization and Democratization in Guatemala” (invierno, 2000), p. 16.

⁶⁷ Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America* (Londres, Nueva York, 1999), Anexo II, pp. 56-57.

⁶⁸ Departamento de Estado de EE.UU., Consejo de Planeación de Políticas, memorándum, 29 de marzo de 1968, reproducido

atrocidades alcanzaron su punto máximo a comienzos de la década de 1980, cuando el ejército masacró a campesinos porque creían que habían estado dándoles refugio a las fuerzas guerrilleras, sobre todo en las provincias fuertemente indígenas del norte del país: Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.

Bajo la supervisión y la presión internacional, tres gobiernos electos democráticamente negociaron una serie de acuerdos de paz con las fuerzas guerrilleras comenzando en 1990 y culminando seis años más tarde con el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”. Los donantes prometieron \$3.200 millones en ayuda, dos tercios de lo anterior en forma de subsidios.⁶⁹ Las reformas por un Estado de Derecho recogieron \$300 millones en promesas, tanto que los expertos temían que el sistema judicial y el de seguridad no serían capaces de absorber todos los recursos nuevos.⁷⁰

Quince años después, son pocos los resultados que Guatemala puede mostrar como fruto de la ayuda internacional diseñada para reforzar el Estado de Derecho. Pese a los crecientes niveles de violencia, hasta el momento el país ha sido incapaz de idear una estrategia para combatir la delincuencia. En 2009, ante las presiones de una coalición de diversos grupos de la sociedad civil, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial firmaron un “Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia”, que incluye 101 propuestas basadas principalmente en medidas acordadas en virtud de los acuerdos de 1996. Dos años después, otro acuerdo ambicioso se quedó sin surtir efecto, ya que fue víctima de la política fragmentada. “Parece que no somos capaces de hacer un proyecto nacional”, dijo Héctor Rosada-Granados, experto en seguridad que tuvo un papel clave en las negociaciones de paz de la década de 1990. “No pensamos en términos de problemas nacionales sino en términos de problemas de los pobres o los ricos o los indígenas. No somos capaces de imaginar un país donde quepamos todos”.⁷¹

Las reformas a los sectores de seguridad y justicia siguen siendo un objetivo clave de la ayuda multilateral y bilateral que recibe Centroamérica de Estados Unidos y Europa. De 2009 a junio de 2011, los donantes entregaron aproximadamente \$1,3 mil millones en forma de subsidios o préstamos para proyectos de varios años que buscan me-

jorar la seguridad en la región.⁷² De lo anterior, \$497 millones eran subsidios bilaterales, de los cuales Guatemala recibía dos tercios (\$325 millones). Pese al aparente éxito de proyectos individuales, como los juzgados con servicio las 24 horas que se han establecido en Ciudad de Guatemala y los dos municipios vecinos, las instituciones judiciales y de aplicación de la ley en el país siguen carentes de fondos y desmoralizadas.

B. LA APLICACIÓN DE LA LEY Y LA JUSTICIA

Los acuerdos de paz de 1996 incluyeron una agenda ambiciosa para reformar el ejército y fortalecer el poder civil. Ya no sería la seguridad interna la principal misión de las fuerzas armadas, sino la defensa de la soberanía territorial. El acuerdo ordenó reducir el tamaño y el presupuesto del ejército en una tercera parte. Ordenó también el desmantelamiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (paramilitares a los cuales se les atribuyen numerosos abusos en zonas rurales), junto con el resto del aparato contrainsurgente. En lugar de la Policía Nacional, una fuerza pequeña y poco entrenada que estaba subordinada a las fuerzas militares, los acuerdos exigieron la creación de una nueva Policía Nacional Civil (PNC) con un personal más numeroso y mejor entrenado, procesos formales reclutamiento y ascensos y un compromiso de ser una entidad verdaderamente multiétnica.

En términos del número de efectivos del ejército, los requisitos del acuerdo de paz se han cumplido e incluso superado. Durante la presidencia de Álvaro Arzú, el mandatario que firmó los acuerdos, el ejército redujo su tamaño de aproximadamente 47.000 efectivos en 1996 a 31.000 para el año siguiente.⁷³ Nueve años después, otro presidente conservador, Óscar Berger, redujo el tamaño del ejército a 15.000 efectivos aproximadamente, la mitad de lo exigido por los Acuerdos de Paz, con el fin de reducir costos y crear una institución militar más pequeña y más profesional.⁷⁴ La policía, por su parte, creció de aproximadamente 12.000 en 1996 a 17.000 en 1999, hasta llegar a un número actual de aproximadamente 25.000, 25 por ciento por encima de los 20.000 que estipularon los acuerdos de paz.⁷⁵

en el Libro de Boletines Electrónicos del Archivo de Seguridad Nacional, no. 11, documento 5.

⁶⁹ Rachel Sieder, et al., “Who Governs? Guatemala Five Years after the Peace Accords”, Hemisphere Initiatives, Enero 2002, p. 2.

⁷⁰ Informe No. ICR0000623, Banco Mundial, 10 de marzo de 2008, p. 3.

⁷¹ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 26 de abril de 2011.

⁷² “Mapeo de las intervenciones de Seguridad Ciudadana en Centroamérica financiadas por la cooperación internacional”, Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junio de 2011.

⁷³ Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), citado en J. Mark Ruhl, “The Guatemalan Military since the Peace Accords”, *Latin American Politics and Society*, 47, no. 1 (primavera 2005), p. 60.

⁷⁴ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 24 de abril, 17 de mayo de 2011.

⁷⁵ “Informe anual circunstanciado”, Procuraduría de Derechos Humanos, op.cit., p. 30. Véase también, “Rescuing Police Re-

Pese a estos aumentos, Guatemala aún tiene una fuerza policial pequeña con relación a su población. Con 169 por 100.000 habitantes, el número de oficiales per cápita está muy por debajo de los países vecinos El Salvador (362), Nicaragua (197) y Honduras (184).⁷⁶ El tamaño no es el único factor que afecta la capacidad de la PNC de luchar contra la delincuencia. En un país donde alrededor de la mitad de la población es indígena, el 84 por ciento de los policías no lo son.⁷⁷ Además, las comunidades indígenas hablan más de veinte idiomas mayas, más uno que no lo es (Garífuna) en la costa caribe. Pocas comisarías cuentan con suficientes intérpretes o con intérpretes que sepan los idiomas locales para trabajar en las comunidades rurales.

La fuerza policial profesional y multiétnica prevista en los acuerdos de paz aún está lejos de ser una realidad, según Helen Mack, una activista de derechos humanos de larga trayectoria nombrada por el presidente Colom para dirigir la comisión para la reforma policial. “En la PNC se encuentran todos los problemas estructurales de Guatemala: discriminación, exclusión, racismo”, afirma.⁷⁸ Los criterios más rigurosos, como el requisito de que los policías tengan un diploma de bachillerato y realicen un programa de diez meses de formación en la escuela de policía, han sido minados por escándalos que incluyen acusaciones de que los ascensos y las becas para estudiar en el exterior se compran y se venden.⁷⁹

Mientras tanto, los uniformados se ven enfrentados a delincuentes que son cada vez más sofisticados. Los policías ganan alrededor de 4.000 quetzales al mes (aproximadamente \$520). La mayoría no trabaja en sus propios municipios (una política diseñada para limitar la corrupción y el favoritismo), de manera que cuando están de turno viven en las estaciones de policía, muchas veces en condiciones miserables, y gastan largas horas en sus días libres viajando en autobús a sus casas.⁸⁰

form: A Challenge for the New Guatemalan Government”, WOLA, enero de 2005.

⁷⁶ Véase “Tentáculos de la criminalidad trascienden fronteras en Centro América”, Ministerio de la Gobernación de Guatemala, 30 de mayo de 2011 (www.mingob.gob.gt).

⁷⁷ “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009-2010”, UNDP, op. cit., p. 202. Sobre la población indígena, véase “World Directory of Minorities and Indigenous Peoples”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), septiembre de 2011, documento que calcula que los 21 grupos diferentes de mayas en Guatemala conforman alrededor del 51 por ciento de la población nacional.

⁷⁸ Entrevista de Crisis Group, Helen Mack, Ciudad de Guatemala, 16 de mayo de 2011.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Entrevistas de Crisis Group, oficiales de la policía, Alta Verapaz, Izabal y San Marcos, mayo de 2011.

Los policías en Salamá, Baja Verapaz, un departamento al norte de la zona central de Guatemala, dijeron que se alojan en una pequeña casa alquilada cerca de la estación en la que 30 hombres comparten dos baños. Pero consideran que están mejor que antes: hasta hace poco, muchos tenían que dormir en la cárcel en las celdas que estaban vacías.⁸¹ En Izabal, un departamento costero en la frontera con Honduras, El Salvador y Belize, un oficial dijo que cuando todos están de turno, algunos son obligados a dormir en el piso y en los pasillos.⁸²

Los policías “están cansados y aburridos. Ellos no comen bien ni duermen bien”, dijo Mario Mérida, el antiguo director de inteligencia militar. “Eso significa que son sujetos altamente vulnerables de ser comprados”. El pago mediocre y las pobres instalaciones socavan no sólo los esfuerzos por ponerle freno a la corrupción sino también el objetivo más amplio de transformar la PNC en una fuerza profesional. “Las condiciones en que viven y trabajan son desmoralizantes”, dijo Mack. “La autoestima de la policía está muy baja”.⁸³ María Xol, del Comité Ejecutivo para la Justicia en Alta Verapaz, una ONG que entrena a la policía, dijo que incluso los oficiales buenos se desmoralizan rápidamente. “No hay incentivo real para hacer el mejor trabajo posible o buscar un ascenso (...) Ni siquiera se ven a sí mismos como autoridades”, afirma.⁸⁴

Integrantes de la PNC entrevistados en Alta y Baja Verapaz, Izabal y San Marcos, importantes departamentos fronterizos y de tránsito, manifestaron preocupaciones similares: no tenían suficientes vehículos y aquellos que tenían se averiaban con frecuencia y pasaban días, incluso semanas, en el garaje. La ración de gasolina, siete galones al día, era insuficiente para llegar a pueblos y zonas rurales comunicados solamente por vías sin pavimentar y en mal estado (y solían quedar incomunicados durante la temporada de lluvias). Incluso si lograban llegar a las poblaciones remotas, no podían entrevistar a los habitantes por falta de intérpretes con un buen conocimiento de los idiomas locales.

Todos se quejaron de que, en cuanto a armas, la policía estaba en desventaja frente a los delincuentes. “Aquí estamos con nuestras pistolitas, y ellos con armas largas”, dijo un oficial en Izabal. “¿Qué podemos hacer frente a ese tipo de potencia?” La mayoría de los agentes cargan sólo revólveres, aunque algunos tienen armas automáticas, por lo general el fusil de asalto Tavor, de fabricación israelí. Mientras tanto, los traficantes portan armas de asalto, incluyendo fusiles AK-47, AR-15 o M-16, granadas e

⁸¹ Entrevista de Crisis Group, Salamá, 2 de mayo de 2011.

⁸² Entrevista de Crisis Group, Puerto Barrios, 7 de mayo de 2011.

⁸³ Entrevista de Crisis Group, Helen Mack, Ciudad de Guatemala, 15 de mayo de 2011.

⁸⁴ Entrevista de Crisis Group, María Xol, Asociación de Justicia de Alta Verapaz, Cobán, 3 de mayo de 2011.

incluso lanzacohetes RPG. Además de las armas, las autoridades han incautado uniformes del ejército y blindaje personal que estaban en poder de los narcotraficantes. “No necesitamos incentivos, beneficios o bonificaciones”, respondió el oficial en Izabal cuando se le preguntó sobre lo que más deseaban sus hombres; “nosotros necesitamos chalecos antibalas”.⁸⁵

Los traficantes exhibían su fuerza superior en Salamá en noviembre de 2010, un mes antes de que las autoridades declararan un estado de sitio en la vecina provincia de Alta Verapaz. Según la policía, varias docenas de hombres que vestían pasamontañas y portaban rifles de asalto y lanzagranadas (*bastones chinos*) rodearon la estación, ubicada sobre la carretera entre Ciudad de Guatemala y Cobán. Les mostraron a los policías fajos de billetes tanto en quetzales como en dólares. “Algunos hablaban con acento mexicano; otros eran guatemaltecos. Por su forma de actuar, parecían ex-militares”, dijo un policía. “Ellos querían estar seguros de que aquí la policía trabajaría con ellos, no con algún otro grupo”.⁸⁶ Sólo el estado de sitio los salvó de un futuro ataque, según los policías en Salamá.

El dinero, las armas, la movilidad y sobre todo la capacidad de dispersarse y reunirse rápidamente, les dan a los narcotraficantes una clara ventaja sobre la policía. “Somos más numerosos, pero estamos dispersos”, dijo un oficial. “Viajamos con dos hombres en un vehículo. Ellos se movilizan con diez hombres en cada camioneta, y suele haber más de una camioneta”. Tales demostraciones descaradas de la fuerza cesaron temporalmente cuando el Gobierno desplegó tropas a Alta Verapaz en diciembre y enero. Para abril, sin embargo, dos meses después de concluido el estado de sitio, los narcotraficantes nuevamente se movilizaban con sus armas a plena vista, según la policía local y los residentes. Un policía contó que varias camionetas interceptaron una patrulla de la policía sobre una vía que no queda lejos de la estación sólo para intimidar.

En Morales, cerca de la costa noreste, y Malacatán, en la frontera occidental con México, tanto la policía como los residentes relataron historias similares. “Los *narcos* viajan en tres o cuatro vehículos, con sus armas a la vista”, contó un oficial en Malacatán. “Ellos tienen los vehículos más nuevos y las armas más grandes”, contó un docente en Morales, “y viajan en convoy”. Con esas demostraciones de fuerza, los narcotraficantes les muestran a las autoridades y a los residentes locales, de manera clara y abierta, que son ricos, que están bien armados y que no tienen ningún temor de ser arrestados.

Tal vez la mayor desventaja de la PNC sea la desconfianza generalizada que siente la población hacia las entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Un estudio preparado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) encontró que el público confiaba menos en la policía que en cualquier otra institución del sistema judicial. En una encuesta que evaluó la confianza hacia las instituciones políticas usando una escala de 1 a 100, el promedio de 31 que obtuvo la policía apenas logró superar el promedio que obtuvieron los partidos políticos (29), la institución política en la que menos se confía. El ejército, por el contrario, obtuvo un promedio de 56, en tanto que las instituciones más respetadas resultaron ser la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, con promedios de 66 y 65, respectivamente.⁸⁷

La PNC sufre de un problema de imagen que la priva de la herramienta más vital para la aplicación de la ley: la cooperación ciudadana. En cada comisaría que se visitó, los oficiales se quejaban de la falta de cooperación de la población local. “No hay cultura de presentar denuncias a la policía”, dijo un policía en Cobán. “No tenemos una idea muy clara de lo que está ocurriendo en muchas comunidades”. “En el altiplano, no tienen fe en las autoridades”, dijo otro en San Marcos, donde hay una gran población indígena y un problema creciente con el cultivo de amapola. “El respeto por parte de la población se ha perdido”.

Los policías reconocieron que los guatemaltecos tenían razón en tener miedo de colaborar con las entidades encargadas de aplicar la ley. “Mucha información se filtra”, comentó un oficial en Izabal. “Y todos saben que el Estado no puede proteger a la mayor parte de los testigos”.⁸⁸ Relató que para cuando los agentes lograban ejecutar órdenes de registro, casi siempre los delincuentes ya se habían fugado, junto con las pruebas: “La policía, los fiscales, el mismo juez podría advertirles”. La desconfianza también dificulta la colaboración entre los mismos policías. En una comisaría, un oficial recomendó no visitar una estación de policía en un pueblo cercano, advirtiendo que estaba “muy infiltrada; nunca sabes con quién estás hablando”.⁸⁹

Esta falta de confianza, tanto al interior de las instituciones como entre el público en general, también obstaculiza el trabajo de los fiscales. “La actitud general es que decir algo a las autoridades simplemente le traeré a usted y a su familia problemas, incluso la muerte”, dijo un fiscal en Puerto Barrios. Un fiscal en San Marcos dijo que era importante reunir pruebas lo más rápido posible. “La mayor

⁸⁵ Entrevista de Crisis Group, Izabal, 7 de mayo de 2011.

⁸⁶ Entrevista de Crisis Group, Salamá, 2 de mayo de 2011.

⁸⁷ Dinorah Azpuru, et. al., *Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010* (Guatemala, 2010), pp. 120-121.

⁸⁸ Entrevista de Crisis Group, Puerto Barrios, mayo de 2011.

⁸⁹ Entrevista de Crisis Group, Alta Verapaz, mayo de 2011.

parte de las personas sólo colaboran si les habla de inmediato, en el escenario del delito. Si tienen la oportunidad de ir a casa, sus familias lograrán convencerles que decir cualquier cosa es demasiado peligroso”.⁹⁰

En Cobán, un fiscal dijo que su oficina había oído rumores de que narcotraficantes estaban extorsionando a empresarios locales, pero no podía confirmar esos informes sin la colaboración de la comunidad. “Nadie se atreve a denunciar. Tienen miedo de que haya personas vinculados a los Zetas aquí en el MP”. Agregó, además, que hay razones para tener temor. “Yo mismo tengo terror de que pudiera haber personas aquí que conozcan o trabajen con los Zetas. Pero si tengo la sospecha, ¿cómo puedo comprobarlo?”⁹¹

Los fiscales dijeron que herramientas nuevas, como el análisis de ADN y mayores posibilidades de realizar escuchas telefónicas, ayudan a resolver delitos que hubieran sido casi imposibles de investigar en los años previos. Pero, como los policías, estas herramientas sufren de falta de recursos. En especial, hay un déficit de líneas para las escuchas telefónicas. Como lo dijo un policía en San Marcos. “Para cada diez solicitudes que haga, tal vez me concedan una”.⁹²

Pese a los altos índices de violencia vinculada al narcotráfico, la mayor parte de los fiscales trabajan sin seguridad o con muy poca. Las oficinas distritales que Crisis Group visitó en Cobán, Puerto Barrio y San Marcos a comienzos de mayo contaban con la protección de sólo un guardia que no estaba fuertemente armado y que tomaba los nombres de los visitantes sin requisar sus pertenencias. Fuera de la oficina, la mayoría de los fiscales no cuentan con escoltas. Un fiscal que trabajaba en un pueblo fronterizo en San Marcos dijo que a él lo había seguido varias veces una camioneta de lujo con cristales polarizados, un vehículo que en los pueblos pequeños se asocia con los narcotraficantes. “Salgo de la oficina y de la casa a distintas horas. Cambio mi ruta. No puedo hacer más.”, dijo.⁹³

El fiscal en Cobán afirmó que la fiscalía había solicitado sin éxito protección policial adicional: las fuerzas locales a duras penas lograban brindar seguridad para funcionarios de gobierno y políticos. “Voy al juzgado solo, a pie, como los otros fiscales (...) siento terror de que algo le pase a alguien de nuestro personal”.⁹⁴

Sus mayores temores se hicieron realidad el 24 de mayo de 2011, cuando los restos descuartizados de Vidaurre, un fiscal auxiliar de 36 años, aparecieron en cinco bolsas plásticas negras en el centro de Cobán. Aunque se le brindó

seguridad adicional a la oficina en Alta Verapaz, aún no se han atendido las solicitudes de la fiscal general, Paz y Paz, sobre más fondos para proteger a los fiscales en zonas de alto riesgo. Además de que no hay dinero adicional para la seguridad, hay menos recursos para operaciones básicas. Pese a verse enfrentados a mayores desafíos, el presupuesto para los fiscales bajó entre 2010 y 2011, según Paz y Paz, quien teme que quizá se vea obligada a reducir los salarios de los empleados.⁹⁵

⁹⁰ Entrevista de Crisis Group, San Marcos, 11 de mayo de 2011.

⁹¹ Entrevista de Crisis Group, Cobán, 3 de mayo de 2011.

⁹² Entrevista de Crisis Group, San Marcos, 12 de mayo de 2011.

⁹³ Entrevista de Crisis Group, San Marcos, 12 de mayo de 2011.

⁹⁴ Entrevista de Crisis Group, Cobán, 3 de mayo de 2011.

⁹⁵ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 25 de agosto de 2011.

V. REDES GUATEMALTECAS

Los narcotraficantes han usado a Guatemala como ruta hacia México y Estados Unidos durante décadas. Para finales de la década de los setenta, cuando el país aún tenía un gobierno militar, los grupos colombianos del narcotráfico ya transportaban grandes cantidades de cocaína a Centroamérica por barco o avión, y luego de ahí a México y a Estados Unidos. Aunque el Mar Caribe ofrecía una ruta más directa a consumidores en Estados Unidos, el istmo centroamericano ofrecía una alternativa viable. Las drogas solían entrar por Honduras y de ahí al oriente de Guatemala, de donde inicialmente emergieron las redes familiares dedicadas al narcotráfico.⁹⁶ Lo que era clave para el paso de la droga eran las relaciones cercanas con los militares que controlaban los puestos de control fronterizos y aduaneros.⁹⁷

Según algunos informes, el primer gran capo guatemalteco, Arnoldo Vargas, era un funcionario aduanero que había colaborado con las fuerzas armadas en los escuadrones paramilitares que operaban en su provincia, Zacapa, durante las décadas de 1960 y 1970.⁹⁸ Más tarde llegó a ser alcalde de la capital departamental, un puesto que le dio protección política hasta 1990, cuando las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de contrabando de toneladas de cocaína.⁹⁹ Según informes, el supuesto sucesor de Vargas en Zacapa, Waldemar Lorenzana, también trabajaba en algún momento como funcionario aduanero.¹⁰⁰ Aunque Lorenzana nunca ejerció un cargo político, siguió la tradición de mantener buenas relaciones con las autoridades

locales y apoyo popular dentro de la comunidad.¹⁰¹ A diferencia de los Zetas, estos grupos guatemaltecos son expertos en relaciones públicas, cuidadosos de mantener su popularidad mediante regalos y obras sociales.

A. NARCOTRAFICANTES SOCIALMENTE ACEPTABLES

El 26 de abril, las autoridades guatemaltecas arrestaron a Lorenzana, conocido también como “el Patriarca”, mientras iba en su camioneta con su nieto por una carretera no pavimentada en El Júcaro, un municipio en el árido departamento del Progreso, ubicado en el centro-oriente del país.¹⁰² Fue un final poco predecible de una persecución que había durado dos años. Las autoridades habían hecho seis intentos de capturar a Lorenzana, al igual que a sus tres hijos y a otros dos miembros del clan familiar buscados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, desde que un juez estadounidense pidió su arresto por cargos de contrabando de cocaína.

El intento más espectacular se presentó en julio de 2009, cuando funcionarios de la policía, el ejército y la justicia (con el apoyo de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA) convergieron en la residencia de los Lorenzana, ubicada en la pequeña población de La Reforma, Zacapa, en un masivo operativo con helicópteros. Aunque la acción conjunta entre Estados Unidos y Guatemala logró descubrir una caleta de armas, no condujo a la captura de ninguno de los prófugos.¹⁰³

Por el contrario, los familiares de Lorenzana montaron una campaña publicitaria para denunciar lo que ellos llamaron un allanamiento ilegal y abusivo. Los familiares mostraron sus salas y dormitorios saqueados a los reporteros de televisión. Manifestantes ocuparon las calles de La Reforma con pancartas que denunciaban la participación estadounidense (“DEA: Injustice for Humanity”, en un inglés mal escrito) y manifestaban apoyo hacia el clan que muchos veían como benefactores cívicos (“Familia Lorenzana: estamos con ustedes”).¹⁰⁴ Sus abogados luego lograron frenar más operativos de arresto durante un año mediante recursos de amparo alegando la inconstitucionalidad de la solicitud de extradición de Estados Unidos.

⁹⁶ Steven S. Dudley, “Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras”, en Eric L. Olson, David A. Shirt y Andrew Selee (editores), *Shared Responsibility: US-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime* (Washington, DC, 2010), p. 66.

⁹⁷ Entrevista de Crisis Group, Héctor Rosada, 26 de abril de 2011. Rosada, consultor de la ONU y experto en política y seguridad en Guatemala, señala a la institución militar como los “operarios históricos” que durante décadas controlaban el ingreso del contrabando.

⁹⁸ Entrevista de Crisis Group, Miguel Castillo, politólogo, 28 de junio de 2011. Véase también Julie López, “Guatemala’s Crossroads: The Democratization of Violence and Second Chances”, en Cynthia J. Arnson y Eric L. Olson (editores), *Organized Crime in Central America: the Northern Triangle*, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas, no. 29 (septiembre de 2011), p. 148.

⁹⁹ Le tomó a EE.UU. dos años para lograr la extradición de Vargas. Véase a continuación y Shelly Emling, “U.S. miffed at Guatemala drug case”, *Los Angeles Times*, 22 de marzo de 1992.

¹⁰⁰ Entrevista de Crisis Group, Edgar Gutiérrez, DESC, Ciudad de Guatemala, 29 de abril de 2011.

¹⁰¹ Véase Julie López, “Guatemala’s Crossroads”, op. cit., p. 176; y Julie López, “Narcotráfico: El ocaso de los Lorenzana”, op. cit.

¹⁰² Ronald Mendoza, “Cae Waldemar Lorenzana, presunto capo”, *Siglo21*, 27 de abril de 2011.

¹⁰³ Luis Ángel Sas, “Falla operativo en Zacapa para capturar a integrantes de la familia Lorenzana”, *elPeriódico*, 22 de julio de 2009.

¹⁰⁴ “Apoyo multitudinario a los Lorenzana”, video, Youtube, publicado 25 de julio de 2009, www.youtube.com/watch?v=0NfOPTp8ZzM.

Dos semanas después de que la Corte Constitucional declarara procedentes las órdenes judiciales, la fiscalía aprovechó la oportunidad para detener al jefe de la familia Lorenzana sin generar alboroto. Cuando las escuchas telefónicas revelaron que él planeaba viajar sin su equipo usual de seguridad, los investigadores decidieron actuar rápidamente. Según los fiscales, los preparativos para el operativo se mantuvieron en secreto con el fin de evitar filtraciones de información que suelen permitir que los prófugos huyan poco antes de la llegada de la policía. Reunieron a diez oficiales élite de la policía sin revelar la índole de su misión.¹⁰⁵ Guardar el secreto valió la pena cuando el equipo logró tomar por sorpresa al patriarca de 72 años, quien estaba desarmado.¹⁰⁶

La captura de Lorenzana ilustra los avances y los escollos de los operativos antinarcóticos guatemaltecos. A diferencia de operativos pasados, que se llevaban a cabo con la presencia evidente de agentes estadounidenses de la DEA, este operativo fue realizado por fuerzas guatemaltecas, las cuales actuaron pese al considerable poderío económico y político de la familia en los departamentos de Zacapa, El Progreso, Jalapa y Chiquimula, en el oriente, y Petén, en el norte.¹⁰⁷ Además de su presunta participación en el narcotráfico, los Lorenzana supuestamente son propietarios o ejercen el control sobre múltiples negocios legítimos, incluyendo una firma de exportación de frutas y empresas constructoras que han ganado contratos lucrativos con el Estado. El operativo demostró “que las autoridades actuales no tienen ningún compromiso con ninguna estructura criminal”, señaló el ministro de gobernación, Carlos Menocal, tras la captura de Lorenzana.¹⁰⁸

Pero aunque las autoridades guatemaltecas efectuaron el arresto por cuenta propia, lo hicieron en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. La justicia guatemalteca no ha formulado acusación formal contra la familia Lorenzana, según los fiscales.¹⁰⁹ Tampoco hay conocimiento de la existencia de cargos penales en el país contra los líderes de otras importantes agrupaciones guatemaltecas (como la familia Ponce, en el oriente; los Zarceños, a lo largo de la costa pacífica hacia el sur, y la red Chamalé, en el suroccidente) pese a que los funcionarios

de gobierno suelen vincular sus nombres al narcotráfico, tanto en público como en privado.¹¹⁰

En una entrevista con un reportero español, el presidente Colom acusó a sus antecesores de haber planeado “la entrega del país” a los narcotraficantes, enumerando con nombre propio a algunos de aquellos considerados por él como las principales agrupaciones. “Todo el mundo hablaba de Lorenzana, de Mendoza, de Ponce... pero nadie los tocaba”, afirmó. “La impunidad era total. Tanto era así que Lorenzana disponía de siete fincas registradas a su nombre en la reserva de la biósfera maya”.¹¹¹

Además, la confidencialidad que fue necesaria para arrestar a Lorenzana, tras múltiples intentos fallidos que se atribuyen a filtraciones de información, demuestra claramente la vulnerabilidad de las instituciones públicas al soborno y la intimidación. Los funcionarios guatemaltecos reconocen que el poder del dinero del narcotráfico y el miedo a las represalias dificultan la realización de operativos antinarcóticos en algunas regiones e incluso pueden comprometer las instituciones nacionales. “Nuestro mayor problema es la infiltración del estado”, dijo la procuradora general, Paz y Paz. “En algunas regiones donde el narcotráfico tiene más presencia, ha logrado penetrar al ministerio público, la PNC y al organismo judicial. Ninguna institución está inmune”.¹¹²

Estas tradicionales agrupaciones criollas (“los narcotraficantes decentes” los llamó un funcionario de la presidencia) no han participado en los dramáticos actos de violencia indiscriminada que han caracterizado a algunos grupos mexicanos como los Zetas. Por el contrario, combinan la intimidación con la generosidad.¹¹³ “Es un error pensar que los narcotraficantes son en su esencia violentos”, dijo Sandino Asturias, del Centro de Estudios Guatemaltecos. “Buscan convertir a la comunidad en una base social que los protege y les suministra una inteligencia buena”

¹⁰⁵ Entrevista de Crisis Group, Ministerio Público, Ciudad de Guatemala, agosto de 2011.

¹⁰⁶ “Capturan a Waldemar Lorenzana a petición de EE.UU”, *Prensa Libre*, 26 de abril de 2011.

¹⁰⁷ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, abril, mayo, agosto de 2011. Véase también Julie López, “Narcotráfico: El ocaso de los Lorenzana”, op.cit.

¹⁰⁸ “Capturan a Waldemar Lorenzana”, op. cit.

¹⁰⁹ Entrevistas de Crisis Group, fiscales, Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre; asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹¹⁰ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011. “Autoridades siguen pista a seis grupos del narcotráfico”, *Prensa Libre*, 5 de abril de 2011.

¹¹¹ Pablo Ordaz, “Entrevista: Álvaro Colom, Presidente de Guatemala: ‘Los narcos nos están invadiendo’”, *El País*, 24 de mayo de 2011. Un fiscal dijo que, aunque en 2006 el Estado cuestionó la validez del título de los Lorenzana sobre los predios que se encuentran dentro de la reserva de Petén, la familia siguió usando la tierra. Dijo que en este momento no hay investigaciones abiertas sobre la familia Lorenzana por ocupación ilegal de tierras protegidas.

¹¹² Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 25 de agosto de 2011.

¹¹³ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2011.

sobre los movimientos tanto de la policía como de sus competidores.¹¹⁴

Se cree que la generosidad se extiende a los partidos políticos nacionales, aunque la opacidad en la financiación de campañas hace que esto sea imposible de comprobar.¹¹⁵ Guatemala, uno de los países más pobres del hemisferio en cuanto a renta per cápita, sostiene campañas políticas que, según los estimados de los observadores, están entre las más costosas de la región en términos per cápita. Mirador Electoral, una coalición de grupos sin ánimo de lucro que observan campañas políticas, calcula que para mediados de agosto, los quince partidos que participan en la campaña de 2011 han gastado más de \$34 millones. Solamente el Partido Patriota de Otto Pérez Molina ha gastado \$11 millones, según el grupo, muy por encima del límite de \$6 millones establecido por el Tribunal Supremo Electoral.¹¹⁶

Estas redes familiares también se han asegurado de mantener buenas relaciones públicas a nivel local, haciendo donaciones generosas para fiestas en los pueblos, construyendo o arreglando escuelas e iglesias, ofreciendo ayuda para los necesitados y pagando salarios y prestaciones generosas a los trabajadores en sus fincas. En San Marcos, Ortiz López y sus caballos de raza figuraron de manera notoria en los desfiles locales; en Izabal y Petén, los Mendoza, otra familia presuntamente vinculada al narcotráfico, resaltan por su apoyo a equipos locales de fútbol.¹¹⁷ En Zacapa, los Lorenzana donaron tierra y construyeron 60 casas para familias que quedaron sin hogar tras la inundación del Río Motagua en 2010.¹¹⁸

No obstante, sería un error describir estos grupos como benignos. Son enormemente ricos y, en gran medida, no tienen que rendirle cuentas a ninguna autoridad externa. Los departamentos fronterizos donde operan están entre las regiones más violentas de Guatemala. Los residentes y funcionarios entrevistados en los departamentos de Izabal, San Marcos y Alta Verapaz veían a los grupos de narcotraficantes como altamente peligrosos y casi omnipresentes, con informantes que han penetrado el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil. Si bien los líderes nacionales y expertos hablan abiertamente de estas agrupacio-

nes familiares, indicando nombres sin temor, aquellos que viven en las regiones dominadas por estas agrupaciones son cautelosos al expresar abiertamente su oposición o sus críticas.¹¹⁹

Por fuera de la normatividad formal, los traficantes hacen cumplir contratos y acuerdos por la fuerza, manteniendo equipos de sicarios. Fuentes en el interior y la capital relataron casos de predios tomados a la fuerza o vendidos bajo coacción.¹²⁰ Las agrupaciones están vinculadas con redes de prostitución y secuestro que presuntamente obligan a mujeres jóvenes a someterse a la esclavitud sexual, afirmó la Fiscal General. Agregó que los grupos guatemaltecos no son tan “burdos” como los Zetas, “pero generan violencia, sobre todo violencia contra las mujeres”.¹²¹

Incluso los lugareños que agradecen lo que los grupos han hecho por sus comunidades, expresan preocupación de cara a su impacto en la sociedad. Un docente en Izabal reconoció que los grupos alejan a las pandillas y la delincuencia común de su pueblo, pero teme por los niños, quienes se han acostumbrado a ver hombres armados con armas AK-47 conduciendo los automóviles más costosos y de mejor calidad. “Para las generaciones nuevas, esto ya es normal”, afirmó, recordando su asombro cuando oyó decir a un niño de preescolar que jugaba con una pistola de juguete, “Soy Mario Ponce, y los voy a matar a todos”.¹²²

B. RESULTADOS MIXTOS

Para arrestar y enjuiciar a los traficantes y a otros delincuentes de alto perfil, las autoridades dependen principalmente de pequeñas unidades cuyos antecedentes han sido investigados y cuya financiación proviene de donantes, que constantemente las tienen bajo observación. Dentro del ministerio público, una unidad especial que trabaja con la CICIG ha investigado casos de alto perfil (como el de corrupción contra el ex presidente Alfonso Portillo y su Ministro de Defensa) y procesos de alto riesgo (como la investigación de una pandilla de narcotráfico acusada de incinerar un autobús en el que se transportaban dieciséis personas).¹²³ Al interior de la policía, hay Unidades

¹¹⁴ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 19 de agosto de 2011.

¹¹⁵ Véase Crisis Group Boletín informativo, *Elecciones en Guatemala*, op. cit., pp. 13-14.

¹¹⁶ “Reporte de la estimación de gastos de campaña, Período del 16 de julio al 15 de agosto de 2011”, Mirador Electoral, 30 de agosto de 2011.

¹¹⁷ Entrevistas de Crisis Group, activistas comunitarios, San Marcos, 11-12 de mayo de 2011; Izabal, 6-7 de mayo de 2011.

¹¹⁸ “Pobladores de La Reforma, Huite, claman ayuda al gobierno de Guatemala”, *El Zacapaneco* (www.elzacapaneco.com), 7 de junio de 2010.

¹¹⁹ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios y activistas comunitarios, Cobán, 2-3 de mayo de 2011; Izabal, 6-7 de mayo de 2011; San Marcos, 11-12 de mayo de 2011.

¹²⁰ *Ibid* y también en la Ciudad de Guatemala, abril y mayo 2011.

¹²¹ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 25 de agosto de 2011.

¹²² Entrevista de Crisis Group, Morales, Izabal, 7 de mayo de 2011.

¹²³ Las instancias judiciales guatemaltecas absolvieron a Portillo de los cargos de corrupción, pero determinaron que sí podía ser extraditado a EE.UU. para enfrentar un juicio por lavado de activos. Para más información sobre los logros y los obstáculos

de Investigaciones Sensibles (UIS) que son patrocinadas por la DEA y que operan bajo la estrecha supervisión de Estados Unidos.¹²⁴

Sin embargo, como reconocen algunos donantes, estas unidades no transformarán por cuenta propia ni la aplicación de la ley ni la administración de la justicia. “No se pueden resolver los males de un país con unidades previamente depuradas”, dijo un funcionario extranjero. “Si se hace de manera correcta, con las intervenciones correctas, se puede lograr un impacto. Pero es un pequeño pinchazo”.¹²⁵

No obstante, los grupos guatemaltecos del narcotráfico han sufrido más arrestos importantes por asuntos de drogas durante el último año que en las dos décadas anteriores. Todos los que fueron arrestados enfrentan cargos en Estados Unidos, y la mayoría fueron capturados con la colaboración de ese país. El arresto de Lorenzana ocurrió a menos de un mes después del arresto de Juan Alberto Ortiz López, mejor conocido como “Chamalé”, por parte de agentes guatemaltecos y estadounidenses en el departamento occidental de Quetzaltenango. El trabajo de inteligencia les permitió a las autoridades detener a Ortiz, de cuarenta años, sin violencia, después de que la policía pasara días observando una casa donde se estaba quedando en Quetzaltenango, el departamento que limita con su lugar de origen, San Marcos.¹²⁶

Ortiz, acusado en un juzgado de Florida por el contrabando de toneladas de cocaína desde 2007, era un pez más gordo para Washington que Lorenzana.¹²⁷ Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas creen que él fue el principal asociado del cartel de Sinaloa en Guatemala, encargado de organizar los barcos de pesca que desembarcan las drogas a lo largo de la costa pacífica centroamericana.¹²⁸ En octubre de 2010, cinco meses después de su captura, la policía guatemalteca y la DEA arrestaron a uno de sus presuntos socios, Mauro Salomón Ramírez, en el departamento de Suichitépéquez, en el litoral sur del país. Ramírez, conocido como el “León del Mar” o por el apodo menos grandioso “El Lanchero”, por su habilidad para

desembarcar carga ilegal, también espera extradición a Estados Unidos.¹²⁹

Otro “extraditable” capturado en el último año es Byron Linares Cordon, arrestado el 7 de junio en el departamento de Sololá, en el centro del país. Linares, quien enfrenta cargos en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de activos, fue detenido inicialmente en 2003, pero incumplió las condiciones de su fianza después de ser puesto en libertad antes del juicio por orden del juez.¹³⁰ Además, dos importantes traficantes guatemaltecos fueron arrestados hace poco en países vecinos. Las autoridades de Belice arrestaron a Otoniel (“El Loco”) Turcios en octubre de 2010, entregándolo rápidamente a agentes estadounidenses que lo subieron a un avión rumbo a su país. Turcios ha sido vinculado a los Zetas en el departamento de Alta Verapaz.¹³¹ En mayo de 2011, la policía hondureña arrestó a Mario Ponce Rodríguez, un presunto traficante con sede en el departamento de Izabal y que también ha sido vinculado a los Zetas, por cargos de narcotráfico y lavado de activos.¹³²

Los que han sido capturados durante el último año representan los arrestos más importantes de capos del narcotráfico en territorio guatemalteco desde la detención en 1990 de Arnoldo Vargas, un exalcalde de Zacapa, quien conspiró con carteles colombianos para ingresar cocaína al país por aire para luego transportarla por tierra a Estados Unidos vía México. Pasaron quince años después de la extradición de Vargas en 1992 (tras dos años de peticiones y recursos de apelación) hasta que los tribunales guatemaltecos concedieron otra solicitud de extradición presentada por Estados Unidos para la entrega de narcotraficantes de-

de la CICIG, véase el Informe de Crisis Group, *Caminar sin muletas*, op. cit.

¹²⁴ Entrevistas de Crisis Group, Washington, DC, abril de 2011. Véase también Thomas M. Harrigan, “US-Central America Security Cooperation”, testimonio, op. cit., p. 4.

¹²⁵ Entrevista de Crisis Group, abril de 2011.

¹²⁶ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, mayo de 2011. Véase también Sonia Pérez, “Guatemala’s alleged No. 1 drug trafficker captured”, Associated Press, 30 de marzo de 2011.

¹²⁷ Pérez, op. cit.; y Departamento de Justicia de los EE.UU., boletín informativo, 30 de marzo de 2011.

¹²⁸ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, abril-mayo de 2011.

¹²⁹ En septiembre de 2010, una fallida redada antidrogas cuyo objetivo eran los asociados de Ramírez resultó en un tiroteo en el centro comercial Tikal Futura, ubicado en un sector lujoso de Guatemala. El intercambio de disparos con la policía duró unos 30 minutos, obligando a los compradores a resguardarse. En el acto murieron un pastor evangélico y dos oficiales de la policía. Aunque algunos informes indican que Ramírez se encontraba en el lugar de los hechos, las autoridades indican que no tienen pruebas de su presencia. Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹³⁰ La liberación de Linares enfureció a los funcionarios estadounidenses, según cables publicados en Wikileaks. Véase “Jueces corruptos, un dolor de cabeza para EEUU”, *Plaza Pública*, 25 de agosto de 2011.

¹³¹ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011. Cable de la Embajada de los EE.UU. en la Ciudad de Guatemala, 6 de febrero de 2009, op. cit.

¹³² Informes de prensa han vinculado a Ponce con los asesinatos relacionados con el narcotráfico de quince nicaragüenses y un ciudadano holandés en 2008. Véase Jerson Ramos, “No hay proceso abierto contra Mario Ponce Rodríguez”, *elPeriódico*, 12 de mayo de 2011.

tenidos.¹³³ Antes de la serie de arrestos del último año, los más importantes narcotraficantes guatemaltecos que estaban en la cárcel o se sometían a juicio en las instancias judiciales de Estados Unidos (con la excepción de Vargas) fueron arrestados en otros países.¹³⁴

¿Por qué será que las autoridades guatemaltecas, tras un periodo tan largo de inactividad, han arrestado a tantos narcotraficantes importantes en menos de un año? La separación de policías corruptos ante presiones de la CICIG y la creciente influencia de oficiales y fiscales previamente investigados podría estar por fin surtiendo efecto. Los fiscales y los investigadores también tienen mejores herramientas, como escuchas telefónicas y un programa de protección de testigos. Según Sandino Asturias, del Centro de Estudios Guatemaltecos, la principal diferencia yace en la nueva dirigencia del ministerio público bajo la conducción de la fiscal general, Claudia Paz y Paz. “La voluntad política es fundamental. Simplemente no existía antes”, afirmó Sandino.¹³⁵

Lo que no queda claro es si alguno de estos arrestos de alto perfil ha tenido un impacto significativo en las actividades de narcotráfico o lavado de activos. Si bien es cierto que resulta admirable el número de narcotraficantes arrestados, las autoridades no han logrado dismantelar las múltiples redes de policías y de otros funcionarios públicos que los protegen. Además, sólo han tenido un impacto mínimo sobre lo que Édgar Gutiérrez llama el cartel de “Los Tumbes” (robos de droga), cuyos integrantes son policías y agentes especializados en el robo de cargamentos de narcóticos. “Aquí los policías operan en tumbes y todo mundo lo sabe”.¹³⁶ Ante las solicitudes de la CICIG en 2008, las autoridades removieron de sus cargos a unos 1.700 oficiales, incluyendo 50 de alto rango, aunque pocos enfrentaron sanciones adicionales o investigación judicial.¹³⁷

El grado de corrupción policial salió a la luz pública en marzo de 2010, cuando las autoridades arrestaron al jefe de

la policía nacional y al jefe de la división anti-narcóticos por cargos relacionados con la muerte de cinco oficiales en una batalla a tiros contra narcotraficantes. Los oficiales sobrevivientes después les informaron a los fiscales que el tiroteo comenzó cuando la policía intentó robar una caleta de droga escondida en una bodega en Amatitlán, una municipalidad al sur de Ciudad de Guatemala. Las autoridades después descubrieron que las armas que se usaron para asesinar a los cinco oficiales habían desaparecido de un arsenal del ejército.¹³⁸

Tampoco hay pruebas de que los arrestos en Guatemala hayan provocado, de manera significativa, el debilitamiento interno de las organizaciones de narcotraficantes. A diferencia de México, donde las capturas o las muertes de capos del narcotráfico han despertado sangrientas rencillas internas, los grupos guatemaltecos parecen haber sobrellevado los arrestos sin conflicto. El hecho de ser muy unidos y manejados por familias ayuda a mitigar las disputas sobre sucesiones: los hijos y hermanos están preparados para tomar las riendas cuando el capo va a la cárcel. Los tres hermanos Lorenzana aún son prófugos de la justicia y presuntamente siguen manejando el negocio familiar. Según informes, el hermano de Ortiz se ha encargado del ingreso de drogas a Guatemala desde el Pacífico. Se cree que Ponce aún dirige sus operaciones desde una celda en una cárcel en Honduras.¹³⁹ “Hemos arrestado individuos”, dijo un asesor del Presidente Colom, “pero no hemos dañado las estructuras”.¹⁴⁰

C. QUÍMICOS Y AMAPOLA

Dos sectores crecientes del negocio internacional del narcotráfico en Guatemala también siguen sin ser afectados por las recientes medidas estrictas: el tráfico de precursores químicos y el cultivo de amapola. Los químicos usados para la fabricación de metanfetaminas y otras drogas sintéticas son importados de Asia y Sudamérica; éstas ingresan al país en cargamentos que llegan al aeropuerto internacional La Aurora y en contenedores de carga a tra-

¹³³ Véase Julie López, “Guatemala: presión de EE.UU. para detener narcos”, BBC Mundo, 2 de abril de 2011. Véase también el informe de López, “Guatemala’s Crossroads”, op. cit.

¹³⁴ Además de Turcios y Ponce, en años recientes, otros tres narcotraficantes guatemaltecos importantes han sido capturados en el exterior: Jorge Mario (“el Gordo”) Paredes-Cordova fue detenido en Honduras en 2008; Otto Herrera, un asociado clave de los Lorenzana, fue tomado en custodia en Colombia en 2007; y Byron Berganza fue arrestado en El Salvador en 2003. Con la excepción de Ponce, todos fueron entregados rápidamente a los EE.UU., indicando que fueron agentes estadounidenses quienes los siguieron o los engañaron para que salieran del país.

¹³⁵ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 19 de agosto de 2011.

¹³⁶ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Edgar Gutiérrez, DESC, 8 de septiembre de 2011.

¹³⁷ Comunicado de prensa 003 de la CICIG, 19 de junio de 2009.

¹³⁸ Juan Manuel Castillo, “Declaraciones de ex policías fueron pieza clave para capturar cúpula policíaca”, *elPeriodico*, 2 de marzo de 2011; Luis Ángel Sas, “Armas robadas al Ejército surgen a partir de septiembre 2008”, *elPeriodico*, 5 de junio de 2009. El arresto del jefe de la policía, Baltazar Gómez, y de la jefe de antinarcóticos, Nelly Bonilla, se dio después de una investigación del tiroteo realizada por la CICIG. Véase “En operativo capturan miembros de PNC involucrados en tumba de droga de Amatitlán”, Comunicado de prensa de la CICIG, 21 de enero de 2010.

¹³⁹ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Edgar Gutiérrez, DESC, 8 de septiembre de 2011.

¹⁴⁰ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

vés de Puerto Quetzal en la costa pacífica.¹⁴¹ El gobierno de Colom, citando el uso del Puerto Quetzal como conducto para drogas y otros artículos de contrabando, tomó el control de su administración en mayo de 2011 para establecer nuevos sistemas de seguridad y personal. Sin embargo, no se anunció ningún arresto.¹⁴²

Pese a estar bajo control gubernamental, aparentemente Puerto Quetzal sigue siendo una puerta de entrada para precursores: en agosto de 2011, autoridades mexicanas decomisaron casi 18 toneladas de químicos que iban dirigidos al puerto a bordo de un carguero que llevaba mercancía de la India.¹⁴³ La policía recientemente descubrió tres laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas en el departamento de San Marcos, limítrofe tanto con el Océano Pacífico como con México. Nuevamente, no se reportaron arrestos de los responsables de los laboratorios.¹⁴⁴

Un fiscal guatemalteco dijo que los investigadores tenían poca información sobre los grupos que estaban detrás de la importación de precursores y la fabricación de drogas sintéticas. Las autoridades aún están tratando de determinar quién era propietario o quién alquilaba el predio en el cual se ubicaban los laboratorios. “Es difícil obtener información alguna de la gente que vive cerca”, dijo el fiscal. “Es casi imposible atrapar a alguien con las manos en la masa. Estos laboratorios están en zonas remotas; la policía no puede llegar sin llamar la atención”.¹⁴⁵

Dada la ubicación de los laboratorios, algunos expertos creen que los hermanos Ortiz López, quienes trabajaban para el cartel de Sinaloa, México, están detrás del tráfico de drogas sintéticas.¹⁴⁶ Se cree que trabajan a la par con otra organización, la familia Zarceño (o Sarceño), la cual presuntamente ha ingresado contrabando a Guatemala a través de sus puertos en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla en la costa pacífica desde la

década de 1990. De ahí, los productos ilegales son enviados a México a través de San Marcos.¹⁴⁷

San Marcos también es el centro del cultivo de amapola en Guatemala. En los tres meses anteriores a marzo de 2011, el ministro de gobernación, Carlos Menocal, dijo que la policía, en colaboración con la Sección de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos, había erradicado más cultivos de amapola, cuyo valor era de aproximadamente \$2 mil millones, que en todo el año 2010. “Si Guatemala no erradica la amapola”, dijo Menocal, “se podría convertir en el segundo país productor más importante después de Afganistán”.¹⁴⁸

Guatemala tiene enorme potencial como país productor de opio, según un experto internacional en drogas, quien estimó que había aproximadamente 2.000 hectáreas cultivadas, principalmente en el departamento de San Marcos, y que la producción estaba expandiéndose. Además, Guatemala es capaz de cosechar más amapola por hectárea que otros países. “Notablemente, los cultivos de amapola se están cosechando cuatro o cinco veces al año. En comparación, Colombia logra dos cosechas en un buen año”, aseguró el experto.¹⁴⁹

La erradicación de amapola en Guatemala toma tiempo y cuesta mucho, pues implica la movilización y el transporte de varios centenares de personas de seguridad, incluyendo personal para arrancar matas y tropas del ejército para protegerlos, a zonas montañosas a donde sólo se puede llegar en vehículos todoterreno o a pie. También es frustrante. “Es un círculo vicioso”, dijo un fiscal antinarcóticos. “Destruimos las matas y luego a los tres meses están de vuelta”.¹⁵⁰

Los fiscales que trabajan en San Marcos dijeron que los campesinos del altiplano que cultivan amapola pertenecen a comunidades que están entre las más pobres de Guatemala. Aunque unos cuantos son ladinos, la mayoría son indígenas cuyo dominio del español es poco o nulo. Las mujeres y los niños se encargan de la mayor parte de la cosecha,

¹⁴¹ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011. Véase también Julie López, “Guatemala’s Crossroads”, op. cit., p. 201.

¹⁴² “Confirman intervención del Puerto Quetzal”, Noticias de Guatemala, 24 de mayo de 2011.

¹⁴³ “Aseguran 17,7 toneladas de precursores de droga en Michoacán”, Proceso, 24 de agosto de 2011.

¹⁴⁴ Entrevista de Crisis Group, ministerio público, Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2011. Véase también “PNC localiza laboratorio de drogas sintéticas”, *Prensa Libre*, 26 de junio de 2011.

¹⁴⁵ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 14 de septiembre de 2011.

¹⁴⁶ Entrevistas de Crisis Group, San Marcos, 11 de mayo de 2011; asesor presidencial, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹⁴⁷ Entrevista de Crisis Group, asesor presidencial, 30 de agosto de 2011. Algunos analistas creen que la organización de Ortiz López absorbió el grupo Zarceño (conocido también como el cartel Luciano) tras el arresto de Allende del Mar Zarceño Castillo en Miami, Florida en 2007. Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Mario Merida, antiguo jefe de inteligencia militar, 15 de septiembre de 2011.

¹⁴⁸ “Incautaciones superan record”, Noticias, Gobierno de Guatemala (www.guatemala.gov.gt), 19 de marzo de 2011.

¹⁴⁹ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, 25 de julio de 2011.

¹⁵⁰ Entrevista de Crisis Group, fiscal antinarcóticos, San Marcos, 12 de mayo de 2011.

un trabajo meticuloso que implica cortar cada vaina con un cuchillo para que el látex pueda filtrarse lentamente.¹⁵¹

Poco se sabe de las redes que controlan el negocio del opio en Guatemala. Los campesinos sólo cuentan a los investigadores que los compradores son mexicanos, quienes también les suministran abono e insecticidas. “No podemos averiguar ni quién es el propietario de la tierra ni quién compra la cosecha”, comentó un investigador. “Ellos lo saben, pero no nos lo dirán”.¹⁵² Los funcionarios especulan que la red controlada por Ortiz López y su hermano podría estar involucrada en el comercio de amapola opiácea.

Los campesinos no tienen ningún incentivo para cooperar con el gobierno que, en gran medida, está ausente de sus comunidades, apareciendo sólo unas cuantas veces al año para destruir su único cultivo lucrativo sin ofrecer alternativa alguna. “No podemos dejar de ver el lado humano de esto”, dijo un fiscal. “Llegamos y destruimos su sustento. ¿De qué más pueden vivir?”¹⁵³

D. LOS INTOCABLES

Un grupo que, según afirmaciones de expertos y funcionarios de gobierno, constituye una de las redes más antiguas y más poderosas de Guatemala no ha sido afectado por operativos recientes: la familia Mendoza. Los Mendoza emergieron inicialmente en el departamento de Izabal, en el oriente del país, en la frontera con Honduras y El Salvador, pero ahora son importantes terratenientes e inversionistas en Petén, un departamento grande y, en gran medida, despoblado que se extiende del norte de Guatemala y limita con México al occidente y al norte, y con Belice al oriente.

La familia tiende a mantener un bajo perfil. A diferencia de los Lorenzana, ninguno de los cuatro hermanos Mendoza (según algunas cuentas son cinco) está en el listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de “Nacionales Especialmente Designados”, con los cuales a los ciudadanos norteamericanos se les prohíbe hacer negocios.¹⁵⁴ Los hermanos han tenido sólo un roce, según lo que se conoce públicamente, con la justicia guatemalteca: dos fueron condenados hace una década por haber ataca-

do a cinco dirigentes sindicales involucrados en una disputa laboral con la empresa bananera local.¹⁵⁵

Sin embargo, desde el presidente Colom (públicamente) hasta funcionarios locales en Puerto Barrios y Morales (en privado), los guatemaltecos vinculan a los Mendoza con el narcotráfico.¹⁵⁶ Su nombre también figura en un informe de 2011 elaborado por el Grupo Congresional del Senado de Estados Unidos sobre el Control Internacional de Narcóticos y se incluye entre las “cinco mayores organizaciones narcotraficantes en Guatemala” relacionadas en una comunicación de la embajada estadounidense en 2005 publicado por Wikileaks.¹⁵⁷ Con la excepción de los Mendoza, todos los grupos familiares nombrados en el cable (León, Lorenzana, Zarceño y Paredes) han perdido

¹⁵⁵ Según una reclamación entablada en nombre de los líderes de sectores laborales en un juzgado de los EE.UU. contra Del Monte Produce, propietario de la empresa guatemalteca involucrada en la disputa, Obdulia y Edwin Mendoza estaban entre un grupo de matones que irrumpieron en la sede del sindicato, golpearon a líderes laborales, amenazaron con matarlos y los obligaron a firmar cartas de renuncia. La reclamación alega que a los Mendoza luego se les otorgaron contratos de arrendamiento a largo plazo de plantaciones de banano. Se encuentra disponible en la página de International Rights Advocates (www.iradvocates.org/LatinAmerica.html). Uno de los hermanos Mendoza también fue vinculado a un vuelo que transportaba droga en 2005, pero aparentemente los cargos nunca fueron imputados. Véase “Hermano de ex director de Contraineligencia, señalado de narco”, *el Periódico*, 19 de noviembre de 2005.

¹⁵⁶ Pablo Ordaz, “Entrevista: Álvaro Colom”, op. cit.; Entrevistas de Crisis Group, Puerto Barrios, Morales, 6-7 de mayo de 2011.

¹⁵⁷ “Responding to Violence in Central America”, un informe del Grupo Congresional del Senado de los EE.UU. sobre el Control Internacional de Narcóticos, septiembre de 2011, p. 21. El número de referencia del cable de la embajada de los EE.UU. publicado por WikiLeaks que incluye a los Mendoza entre los principales grupos de narcotráfico del país es 05GUATEMALA1403, con fecha del 6 de febrero de 2005. Los Mendoza también son vinculados al narcotráfico en otros cables de la embajada de los EE.UU., incluyendo el 09GUATEMALA45, con fecha del 14 de enero de 2009, en el cual el embajador Stephen McFarland informa sobre la promesa de un ministro de gobernación guatemalteco de perseguir a las “principales familias del narcotráfico, incluyendo los Lorenzana y los Mendoza”. El cable señala, sin elaboración, que recientemente la PNC había “ejecutado un operativo importante aunque finalmente infructuoso contra los Mendoza”. Además, “los carteles Lorenzana y Mendoza” se mencionan en la acusación formal en los EE.UU. contra cuatro guatemaltecos y un oficial de la policía en Nashville en 2009 por cargos de contrabando de armas hacia Guatemala. Véase Departamento de Justicia, Fiscal de los EE.UU., Distrito Central de Tennessee, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2009. Integrantes de los grupos Lorenzana y Mendoza giraron “sustanciales sumas de dinero” para la “compra y exportación de armas de fuego y municiones”, según la acusación formal.

¹⁵¹ Entrevista de Crisis Group, fiscales antinarcóticos, San Marcos, 12 de mayo de 2011.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Oficina del Tesoro del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. tiene un listado de empresas e individuos que, según la entidad, tienen vínculos con el terrorismo o el narcotráfico. Véase www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List.

integrantes, bien sea a raíz de arrestos efectuados con órdenes de arresto de Estados Unidos o asesinatos a manos de otros delincuentes.¹⁵⁸

La capacidad de los Mendoza de mantenerse con vida y alejarse de los problemas ha despertado rumores (jamás verificados) de contactos políticos de alto nivel y/o arreglos con otros grupos dedicados al narcotráfico. Pérez Molina recientemente negó que su Partido Patriota hubiera trabajado con los Mendoza en Izabal, mientras acusaba al partido de gobierno UNE de aceptar dinero de narcotraficantes en Zacapa.¹⁵⁹ También se rumora que han establecido algún tipo de acuerdo de paz con los Zetas. Según fuentes del gobierno, los miembros de la familia salieron del país en 2011 para pasar varios meses en Belice y/o Brasil por temor al cartel mexicano. Su regreso y el hecho de que sus predios y empleados se hayan salvado de los ataques han alimentado las especulaciones sobre un arreglo comercial o pacto de no agresión entre ellos y sus rivales.¹⁶⁰

Los Mendoza niegan cualquier vínculo con actividades delictivas. Cuando su nombre emergió recientemente en una disputa sobre tierras en Izabal, Milton Mendoza Mata se quejó de que su familia había sido injustamente vilipendiada por la prensa. Le dijo a la periodista Claudia Méndez Arriaza: “Hay mala fe en contra nuestra, porque hemos sido víctimas de acusaciones que nunca han sido probadas... Nunca un solo tribunal nos ha procesado. No existe ni en fiscalías ni en tribunales ni en la Embajada de Estados Unidos ni en la CICIG, una acusación ni pruebas de esos señalamientos”.¹⁶¹

Cualquiera que sea la fuente de su riqueza, los Mendoza se encuentran entre los terratenientes y empresarios más importantes del departamento de Izabal. Como la familia

Lorenzana, son dueños de cierto número de empresas legales, incluyendo la empresa de autobuses Fuente del Norte y los Jaguares de Heredia, un equipo de fútbol que habían trasladado de Izabal a Petén y luego de regreso a Izabal.¹⁶² Milton Mendoza es integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.¹⁶³ Los residentes de Morales dicen que la familia es dueña del hotel más nuevo del pueblo, gasolineras y una flota de microbuses; incluso se dice que controla sus “tuk-tuks”, taxis motorizados de tres ruedas que prestan un servicio de transporte local. Los activistas locales comentaron que los hermanos también participan en actividades sin ánimo de lucro; sirven en la brigada voluntaria de bomberos y construyeron una iglesia evangélica nueva y grande.¹⁶⁴

Se sabe que viajan fuertemente escoltados. Cuando miembros de la familia o sus asociados pasan por el pueblo, lo hacen en caravanas de camionetas doble cabina o camionetas de lujo llenas de hombres fuertemente armados, según residentes. Tanto en Morales como en Puerto Barrios, los hermanos son considerados más importantes que los funcionarios de la ciudad. Un abogado comentó que “si quiere iniciar una empresa, no le pregunte a la ciudad; pregúntele a los Mendoza”.¹⁶⁵

Los métodos de las mafias familiares guatemaltecas tal vez sean menos cruentos que los de los grupos más violentos, pero son eficaces. Los abogados que trabajan en Izabal dijeron que la simple sugerencia de que poderosos narcotraficantes se encuentran detrás de un negocio suele ser suficiente para intimidar a los individuos para que vendan sus tierras; o podrían simplemente pagarle a un funcionario corrupto para que registre una venta que nunca ocurrió. “La escrituración de predios es un desorden”, comentó un abogado, agregando además que los nombres o linderos podrían ser fácilmente cambiados. “No es poco común encontrar diferentes personas que figuran como propietarios del mismo predio”.¹⁶⁶

Los defensores del medioambiente están especialmente preocupados por la compra o dominio de tierras que se encuentran dentro de reservas naturales y de predios otorgados a comunidades indígenas. Organizaciones no gubernamentales en Izabal han trabajado durante años con el objeto de dar a las comunidades indígenas títulos de propiedad sobre sus tierras. Ahora ven que hay comunidades que venden sus parcelas, bien sea por un beneficio económico o por temor a represalias y se mudan a tierras mu-

¹⁵⁸ Véase la Sección II, arriba, sobre el asesinato de Juancho León. Su hermano, Haroldo, fue asesinado un día antes de la masacre de Los Cocos; véase “Asesinan a hermano de Juancho León en Petén”, *el Periódico*, 14 de mayo de 2011. Sobre Zarceño o Sarceño, véase Luis Ángel Sas, “Sarceño era jefe de narcos desde 2001, asegura la PNC”, *el Periódico*, 25 de enero de 2007. Sobre Paredes, véase Alison Gendar, “Jorge ‘Gordo’ Paredes-Cordova gets 31 years in prison for leading drug-trafficking ring”, *New York Daily News*, 17 de abril de 2010.

¹⁵⁹ Véase Óscar Martínez, “General Otto Pérez Molina, candidato presidencial de Guatemala”, *elfaro* (www.elfaro.net), 19 de septiembre de 2011. La fuente de las alegaciones fue un cable de 2007 de la Embajada de los EE.UU. en la Ciudad de Guatemala, “Pérez Molina outlines second-round strategy”, publicado por Wikileaks y *Plaza Pública* (<http://wikileaks.org>). Según el cable, Pérez le dijo al embajador de los EE.UU. que su partido alguna vez había tenido contactos con un miembro de la familia en Izabal, pero que estos contactos se cortaron.

¹⁶⁰ Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala e Izabal, mayo, junio de septiembre de 2011.

¹⁶¹ Claudia Méndez Arriaza, “Disputa en Izabal: ‘Esta tierra es mía’. ‘No, yo la compré’”, *el Periódico*, 25 de marzo de 2011.

¹⁶² “Vuelvan a Morales”, guatefutbol.com, 5 de septiembre de 2011.

¹⁶³ Entrevistas de Crisis Group, Izabal y Ciudad de Guatemala, mayo de 2011.

¹⁶⁴ Entrevistas de Crisis Group, Izabal y Ciudad de Guatemala, mayo de 2011.

¹⁶⁵ Entrevista de Crisis Group, Puerto Barrios, 6 de mayo de 2011.

¹⁶⁶ Entrevista de Crisis Group, Puerto Barrios, 6 de mayo de 2011.

cho más pobres en las montañas. Parte de la tierra se usa para cultivos de exportación, como la caña de azúcar o la palma africana; parte se convierte en pastizal, aunque con frecuencia la mayor parte de la tierra permanece vacía. “Ni siquiera se ve ganado, sólo un rodeado de cercas y alambre de púas”, comentó un activista, quien especuló que estos predios fueron comprados bien sea para lavar activos o para almacenar contrabando.¹⁶⁷

Un funcionario de gobierno dijo que estas praderas vacías y cercadas en zonas remotas también se podrían convertir fácilmente en pistas de aterrizaje. “Sólo se quitan las cercas cuando un avión está a punto de aterrizar, y se reemplazan cuando se vaya”, indicó.¹⁶⁸

Aunque sus raíces estén en Izabal, los Mendoza han hecho muchas inversiones en El Petén. Ellos no están solos. Petén es el departamento donde varias redes guatemaltecas de narcotráfico, más los Zetas, chocan. Alguna vez conocido por sus maravillas naturales y arqueológicas, las cuales aún atraen turistas internacionales a las ruinas mayas de Tikal y a los balnearios a lo largo del Lago de Flores, últimamente se ha vuelto tristemente célebre por asesinatos vinculados al narcotráfico. En 2010 (incluso antes de la masacre de Los Cocos), se encontraban en ese departamento tres de los cuatro municipios más violentos de Guatemala (per cápita).¹⁶⁹

Los Mendoza han comprado vastas extensiones de tierra en Petén, según un estudio reciente realizado por grupos de la sociedad civil en el departamento.¹⁷⁰ Los investigadores, quienes examinaron las escrituras inmobiliarias, pudieron identificar 23 fincas de propiedad de miembros de la familia en cuatro municipios. La extensión total de sus propiedades era de aproximadamente 600 caballerías (casi 30.000 hectáreas). Las propiedades están conectadas por una red de vías poco transitadas y sin pavimentar y de arroyos o ríos que alcanzan la frontera mexicana que en gran medida no cuenta con vigilancia. Los testigos les di-

jeron a los investigadores que cada hacienda cuenta con la protección de grupos de hombres armados.¹⁷¹

El estudio encontró que el imperio empresarial de los Mendoza también se extiende hacia Petén. Además de sus grandes haciendas, una de las cuales cuenta con tanques piscícolas, las otras empresas registradas en sus nombres incluyen constructoras, un hotel y restaurante, una importadora de repuestos automotrices, proveedores de productos o servicios agrícolas y veterinarios, gasolineras y varias empresas de transporte.¹⁷²

Las familias Lorenzana y León también han comprado bastante tierra en Petén, aunque sus propiedades no son tan extensas como las de los Mendoza. Según el estudio, también figuran en el catastro departamental tierras de propiedad de la familia de Byron Berganza, un narcotraficante que ahora se encuentra encarcelado en Estados Unidos, y predios de propiedad de otros tres presuntos grupos dedicados al narcotráfico.¹⁷³

Aunque la ubicación y el aislamiento de sus predios podrían facilitar el almacenamiento y el transporte de drogas a México, la importancia de Petén para las agrupaciones va más allá del narcotráfico. Petén brinda un medio para diversificar sus negocios y, quizá más importante, adquirir una base política y estratégica. Los narcotraficantes están íntimamente engranados en la política local, donde sus negocios compiten por lucrativos contratos públicos. Además, se cree que son contribuyentes a candidatos políticos a nivel local y nacional.¹⁷⁴

Lo que está algo escondido, oculto o desmentido en otros departamentos es mucho más evidente en Petén. El politólogo Miguel Castillo dijo que el departamento permite que los narcotraficantes guatemaltecos operen de manera aún más abierta y a mayor escala que en otras zonas del país. “En Petén son visibles. Tienen alcaldes y diputados. Su poder allá está intacto”.¹⁷⁵ ☑

Aunque un funcionario del gobierno dijo que el departamento de Petén estaba volviendo a la normalidad tras meses con decretos de emergencia en vigor, también afirmó que no veía esperanzas de lograr la derrota de los Zetas en ese departamento. Los Zetas han sufrido docenas de arres-

¹⁶⁷ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 29 de abril de 2011.

¹⁶⁸ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 30 de agosto de 2011.

¹⁶⁹ “Informe Anual Circunstanciado”, Procuraduría de los Derechos Humanos, op. cit., p. 42. El departamento, en su totalidad, ocupó el puesto 7 entre los 22 departamentos de Guatemala en materia de violencia. Véase Carlos A. Mendoza, “¿Porque el Petén y no el departamento de Guatemala?”, The Black Box, Central American Business Intelligence (www.ca-bi.com), 14 de junio de 2011.

¹⁷⁰ “Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios”, julio de 2011. El estudio, publicado de manera anónima para la seguridad de los investigadores, se difundió en la página Insight: Organized Crime in the Americas (insightcrime.org).

¹⁷¹ *Ibíd.*, pp. 80, 84.

¹⁷² *Ibíd.*, p. 84.

¹⁷³ *Ibíd.*, pp. 89-90.

¹⁷⁴ Grupos de Poder ofrece un análisis sin precedentes de cómo los políticos reparten contratos públicos a sus partidarios.

¹⁷⁵ Fuentes en la capital y en Izabal dijeron que miembros de la familia salieron de Guatemala para Belize y Brasil debido a amenazas provenientes del cartel mexicano. Sólo volvieron después de tener garantías de seguridad. Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 27 de junio, 30 de agosto de 2011; Izabal, 6-7 de mayo de 2011.

tos y parecen haberse dispersado hacia otras regiones o hacia el otro lado de la frontera con México. “Pero pueden perder diez o quince, y mañana conseguirán otros veinte. Los reclutas para estos grupos son materia desechable”.¹⁷⁶

Los operativos en Petén tampoco han afectado a los grupos tradicionales cuyos intereses penetran la economía regional. Aunque la violencia feroz de los Zetas obligó al gobierno nacional a tomar acciones en su contra, las mafias guatemaltecas siguen protegidas gracias a su enorme peso económico. En Guatemala, el “tráfico de influencias”, tal como lo llama el antiguo ministro de gobernación, Francisco Jiménez, es especialmente intenso a nivel local. “Hasta ahora los Zetas parecen no haber sido capaces de penetrar los gobiernos locales” tan eficazmente como lo han hecho los otros grupos, “pero tal vez tengan que aprender”.¹⁷⁷

VI. CONCLUSIÓN

El gobierno guatemalteco, gracias a ciertos funcionarios alentados por algo de ayuda internacional y una presión considerable (especialmente de Estados Unidos), ha mermado el poder de los carteles mexicanos y sus homólogos nacionales. Ha logrado capturar tanto a narcotraficantes importantes que ahora esperan extradición a Estados Unidos como a asesinos integrantes de los Zetas que ahora enfrentan cargos en Guatemala. Pero las condiciones que han permitido el florecimiento del crimen organizado en el país más poblado de Centroamérica persisten: un Estado débil que no puede satisfacer las necesidades básicas de su propio pueblo, mucho menos enfrentarse a carteles internacionales fuertemente armados y con bastante dinero. La geografía ha convertido a Guatemala en un importante conducto para los narcóticos dirigidos a Norteamérica. Si a lo anterior se agrega la debilidad institucional y la pobreza endémica, se dan las condiciones ideales para el surgimiento de la violencia y la corrupción.

Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda ronda de elecciones presidenciales en noviembre de 2011 han hecho campaña con promesas de adoptar una postura de mano dura frente al crimen organizado y la delincuencia común. El general retirado Otto Pérez Molina, ganador de la mayor cantidad de votos en la primera ronda, ha prometido crear grupos de trabajo interinstitucionales y brigadas de policía militar especial.¹⁷⁸ Su oponente, Manuel Baldizón, un empresario adinerado, ha usado una retórica aún más fuerte durante la campaña: una de sus promesas de bandera es el restablecimiento de la pena de muerte.¹⁷⁹

Ningún candidato ha respaldado un ataque frontal contra los grupos de narcotráfico, tal como el que ha lanzado el gobierno mexicano. Pero la respuesta del próximo presidente ante este flagelo dependerá en gran medida de la propagación hacia Guatemala de las brutales batallas entre grupos de narcotráfico en México. La masacre de Los Cocos podría ser recordada como un incidente horroroso, pero aislado, y no como uno de los primeros episodios de una guerra entre carteles. Algunos analistas creen que los Zetas podrían actuar como sus homólogos guatemaltecos, manteniendo un bajo perfil mientras sigilosamente infiltran instituciones económicas y políticas. “El enfrenta-

¹⁷⁸ Véase Agenda de Cambio, Partido Patriota (www.partidopatriota.com).

¹⁷⁹ Véase Plan de Gobierno, Partido LIDER (www.lider.org.gt). Aunque las leyes guatemaltecas permiten la pena muerte, su uso se ha suspendido desde 2000. El presidente Colom ha ejercido su poder de veto dos veces contra proyectos de ley que hubieran reactivado el uso de la pena capital. “Guatemala’s Colom vetoes pro-death-penalty measure”, *Latin American Herald Tribune*, 15 de septiembre de 2011.

¹⁷⁶ Entrevista de Crisis Group, 30 de agosto de 2011.

¹⁷⁷ Entrevista de Crisis Group, 14 de septiembre de 2011.

miento con el Estado no les ha dado resultado”, dijo un funcionario de gobierno.¹⁸⁰

Pero el arraigo nacional de los Zetas implicaría el deterioro de la democracia, destruyendo así las esperanzas de aquellos que hace quince años creían que su país finalmente iba a poder dejar atrás su pasado violento. La construcción de instituciones democráticas dignas de la confianza de los ciudadanos y atentas a sus necesidades requerirá de bastante voluntad política por parte de los líderes guatemaltecos, y apoyo financiero y moral desde el exterior. Los donantes, sobre todo Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilegales, deben aumentar sus esfuerzos por ayudar a los guatemaltecos a fortalecer su policía y su rama judicial. Sin funcionarios capaces y respaldados por instituciones estables, Guatemala no podrá afrontar redes ilícitas sumamente adineradas y dotadas de armamento, cuyos delitos tienen un alcance que va mucho más allá de sus propias fronteras.

El próximo presidente de Guatemala no solo tiene que seguir persiguiendo a los capos de la droga y a los asesinos que forman parte de los Zetas, sino que también debe abordar las condiciones que permiten el florecimiento del crimen organizado. Ello implica brindar a la policía y a los fiscales los recursos, la formación y el respeto que necesitan para perseguir y castigar a los que quebrantan la ley. Para fortalecer a los fiscales, debe permitir que la fiscal general, Claudia Paz y Paz, termine su periodo de cuatro años; y para fortalecer a la policía, debe apoyar plenamente las labores de la comisionada para la Reforma Policial, Helen Mack, referentes a la creación de fuerzas de seguridad pública que sean profesionales y eficaces.

El nuevo gobierno también tiene que apoyar a la CICIG. Este esfuerzo multinacional único, creado para investigar redes clandestinas al interior del Estado, tendrá un impacto a largo plazo sólo si los líderes electos respaldan firmemente sus esfuerzos por eliminar y procesar a aquellos funcionarios que tengan vínculos con organizaciones ilegales.

Se requiere de recursos suficientes para cualquier labor de reforma. Esto implicará aumentar las rentas públicas nacionales en vez de depender de los donantes. Históricamente, los impuestos bajos, las maniobras jurídicas y la masiva evasión fiscal han privado al gobierno guatemalteco de los fondos que necesita no sólo para mejorar la nutrición, la educación y los servicios de salud, sino también para garantizar la seguridad pública. El nuevo presidente, sin embargo, sólo obtendrá respaldo popular para un incremento en los impuestos y su recaudo más eficaz

si su gobierno emprende de manera simultánea esfuerzos serios y continuos por combatir la corrupción.

A nivel regional, Guatemala y las otras seis naciones de Centroamérica deben expandir los esfuerzos conjuntos por combatir la delincuencia mediante mecanismos como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Aunque se creó inicialmente para promover el comercio y el desarrollo, SICA ahora ha establecido la seguridad regional como una de sus prioridades. Los Estados miembros deben trabajar por implementar acuerdos que faciliten el intercambio de información, armonicen políticas de seguridad regional y coordinen los operativos transnacionales de lucha contra la delincuencia.

Finalmente, los líderes internacionales, sobre todo los de países de consumo como Estados Unidos, deben continuar e idealmente aumentar su financiación de programas que tienen por objeto no sólo combatir el narcotráfico en el exterior sino también disminuir el uso de drogas ilegales en sus países. Pero esto no implica destinar más dinero a programas que, a través de las décadas, han fracasado en su intento de frenar el narcotráfico. Por el contrario, los líderes políticos deben seguir las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas y abrir un verdadero debate sobre estrategias de antinarcóticos que cuestione las suposiciones básicas detrás de las políticas actuales, evalúe los riesgos y beneficios de diferentes aproximaciones y, finalmente, formule recomendaciones de reforma viables y basadas en evidencias.¹⁸¹

**Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas,
11 de octubre de 2011**

¹⁸⁰ Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 25 de agosto de 2011.

¹⁸¹ La Comisión Global de Políticas sobre Drogas es una comisión internacional creada con el fin de continuar el trabajo de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, iniciada en 2008 por tres ex presidentes (Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México). Los informes y las investigaciones de antecedentes de la Comisión se encuentran en www.globalcommissionondrugs.org.

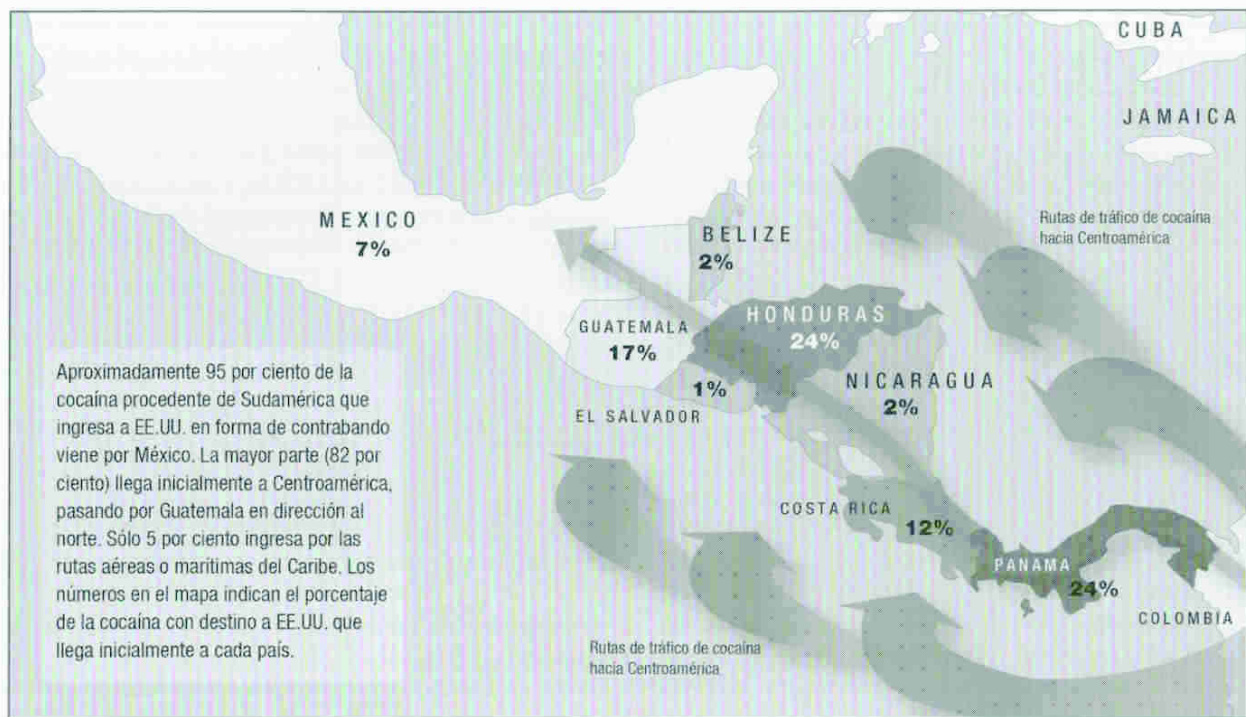
APÉNDICE A

MAPA DE GUATEMALA



APÉNDICE B

MAPA DE RUTAS DE TRÁFICO DE COCAINA HACIA CENTROAMÉRICA



APÉNDICE C

ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 130 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de 12 páginas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en las situaciones de conflicto o conflicto potencial más sensibles del mundo.

Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son distribuidos por correo electrónico y también se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group – cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación – participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es presidido por Thomas Pickering, ex embajador de Estados Unidos. Su presidenta y directora ejecutiva desde julio de 2009 es Louise Arbour, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y el grupo tiene también oficinas de sensibilización en Washington D.C. (en donde es entidad jurídica) y Nueva York, una más pequeña en Londres y enlaces en Moscú y Beijing. En la actualidad, la organización cuenta con nueve oficinas regionales (en Bishkek, Bogotá, Dakar, Estambul, Islamabad, Nairobi, Pristina, Tbilisi y Yakarta) y tiene representaciones sobre el terreno en otras catorce localidades (Baku, Bangkok, Beirut, Bujumbura, Damasco, Dili, Jerusalén, Kabul, Katmandú, Kinshasa, Puerto Príncipe, Pretoria, Sarajevo y Seúl). Crisis Group cubre en la actualidad cerca de 60 zonas de conflicto actual o potencial en cuatro continentes. En África, estos países incluyen Burundi, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Madagascar, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabue; en Asia, Afganistán, Bangladesh, Birmania/Myanmar, Cashe-

mira, Corea del Norte, Estrecho de Taiwán, Filipinas, Indonesia, Kazajstán, Kirgizistán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Leste, Turkmenistán y Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Georgia, Kosovo, Macedonia, Rusia (Cáucaso Norte), Serbia y Turquía; en el Oriente Medio y África septentrional, Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Estados del Golfo, Irán, Iraq, Israel-Palestina, Líbano, Marruecos, Siria y Yemen; y en América Latina y el Caribe, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Venezuela.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones institucionales y fuentes privadas. En los últimos años, ha recibido recursos de los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Australia, Agencia Austriaca para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Centro Canadiense de Investigación y Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Comisión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Irish Aid, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Principado de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Noruega, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Consejo para el Desarrollo Económico y Social del Reino Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.

Las siguientes fundaciones institucionales y privadas han aportado recursos en los últimos años: Carnegie Corporation of New York, The Charitable Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund, The Elders Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish World Watch, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund y VIVA Trust.

Agosto de 2011

APÉNDICE D

INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2008

- La droga en América Latina I: perdiendo la lucha*, Informe sobre América Latina N°25, 14 de marzo de 2008.
- La droga en América Latina II: optimizar las políticas y reducir los daños*, Informe sobre América Latina N°26, 14 de marzo de 2008.
- Colombia: lograr que el avance militar rinda frutos*, Boletín informativo sobre América Latina N°17, 29 de abril de 2008.
- Bolivia: rescatar la nueva Constitución y la estabilidad democrática*, Boletín informativo sobre América Latina N°19, 19 de junio de 2008.
- Venezuela: ¿Reforma política o colapso del régimen?*, Informe sobre América Latina N°27, 23 de julio de 2008.
- Reforming Haiti's Security Sector*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°28, 18 de septiembre de 2008.
- Rectificar el curso: las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia*, Informe sobre América Latina N°29, 30 de octubre de 2008.
- Haiti 2009: Stability at Risk*, Boletín informativo sobre América Latina y el Caribe N°19, 3 de marzo de 2009.
- Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta*, Informe sobre América Latina N°30, 26 de marzo de 2009.
- Haiti: Saving the Environment, Preventing Instability and Conflict*, Boletín informativo sobre América Latina y el Caribe N°20, 28 de abril de 2009.
- Dos pasos complementarios: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia*, Boletín informativo sobre América Latina N°21, 25 de mayo de 2009.
- Venezuela: la Revolución Bolivariana acelerada*, Boletín informativo sobre América Latina N°22, 5 de noviembre de 2009.
- Un posible tercer periodo de Uribe y la resolución del conflicto en Colombia*, Informe sobre América Latina N°31, 18 de diciembre de 2009.
- Haiti: Stabilisation and Reconstruction after the Quake*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°32, 31 de marzo de 2010.
- Guatemala: asfixiada entre el crimen y la impunidad*, Informe sobre América Latina N°33, 22 de junio de 2010.
- Mejorar la política de seguridad en Colombia*, Boletín informativo sobre América Latina N°23, 29 de junio de 2010.
- Colombia: la oportunidad del presidente Santos de poner fin al conflicto*, Informe sobre América Latina N°34, 13 de octubre de 2010.
- Haiti: The Stakes of the Post-Quake Elections*, Informe sobre América Latina y el Caribe N°35, 27 de octubre de 2010.
- Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala*, Informe sobre América Latina N°36, 31 de mayo de 2011.
- Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia*, Boletín informativo sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011.
- Romper los nexos entre crimen y política local: Las elecciones de 2011 en Colombia*, Informe sobre América Latina N°37, 25 de julio de 2011.
- Violencia y política en Venezuela*, Informe sobre América Latina N°38, 17 de agosto de 2011.
- Preservar la seguridad en Haití: la reforma policial*, Boletín informativo sobre América Latina y el Caribe N°26, 8 de septiembre de 2011.

APÉNDICE E

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

DIRECTOR

Thomas R. Pickering

Ex embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria; vicepresidente de Hills&Company

PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA

Louise Arbour

Ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda

CONSEJO DIRECTIVO

Morton Abramowitz

Ex secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos y embajador en Turquía

Cheryl Carolus

Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex secretaria general del ANC

Maria Livanos Cattau

Miembro de la junta directiva, Petroplus Holdings, Suiza

Yoichi Funabashi

Editor en jefe de *The Asahi Shimbun*, Japón

Frank Giustra

Presidente y director ejecutivo de Fiore Capital

Ghassan Salamé

Decano, Escuela de Relaciones Internacionales de París, Ciencias Políticas

George Soros

Presidente de Open Society Institute

Pär Stenbäck

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

Adnan Abu-Odeh

Ex consejero político del rey Abdullah II y del rey Hussein; representante permanente de Jordania ante las Naciones Unidas

Kenneth Adelman

Ex embajador de los Estados Unidos y director del Organismo para el Control de Armas y Desarme

Kofi Annan

Ex secretario general de las Naciones Unidas; Premio Nobel de la Paz (2001)

Nahum Barnea

Columnista principal de *Yedioth Ahronoth*, Israel

Samuel Berger

Presidente, Albright Stonebridge Group LLC; ex consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos

Emma Bonino

Vicepresidenta del Senado; ex ministra de Comercio Internacional y Asuntos Europeos de Italia y comisionada europea para Ayuda Humanitaria

Wesley Clark

Ex comandante supremo aliado de la OTAN, Europa

Sheila Coronel

Toni Stabile, profesora de prácticas de periodismo investigativo; directora, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, Estados Unidos.

Jan Egeland

Director, Norwegian Institute of International Affairs; ex Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas

Uffe Ellemann-Jensen

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca

Gareth Evans

Presidente emérito de Crisis Group; ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia

Mark Eyskens

Ex primer ministro de Bélgica

Joshua Fink

Director ejecutivo & director de inversiones, ENSO Capital Management LLC

Joschka Fischer

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

Jean-Marie Guéhenno

Profesor Arnold Saltzman de práctica profesional en relaciones internacionales y asuntos públicos, Columbia University; ex secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas

Carla Hills

Ex secretaria de Vivienda de los Estados Unidos; ex representante de comercio de los Estados Unidos

Lena Hjelm-Wallén

Ex viceprimera ministra y ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia

Swanee Hunt

Ex embajadora de los Estados Unidos en Austria; presidenta del Institute for Inclusive Security; presidenta de Hunt Alternatives Fund

Mo Ibrahim

Fundador y presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celltel International

Igor Ivanov

Ex ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia

Asma Jahangir

Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad religiosa o de creencias; presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán

Wim Kok

Ex primer ministro de los Países Bajos

Ricardo Lagos

Ex presidente de Chile

Joanne Leedom-Ackerman

Ex secretaria internacional de International PEN; novelista y periodista, Estados Unidos

Lord (Mark) Malloch-Brown

Ex administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y secretario general adjunto de las Naciones Unidas

Lalit Mansingh

Ex secretario de Relaciones Exteriores de la India, embajador ante los Estados Unidos y alto comisionado ante el Reino Unido

Jessica Tuchman Mathews

Presidenta del Carnegie Endowment for International Peace

Benjamin Mkapa

Ex presidente de Tanzania

Moisés Naím

Asociado principal, International Economics Program, Carnegie Endowment for International Peace; ex redactor en jefe, *Foreign Policy*

Ayo Obe

Experto jurídico, Lagos, Nigeria

Paul Reynolds

Presidente & director ejecutivo, Canaccord Financial Inc.; vice chair, Global Head of Canaccord Genuity

Güler Sabancı

Presidente de Sabancı Holding, Turquía

Javier Solana

Ex alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, ex secretario general de la OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores de España

Lawrence Summers

Ex director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos y ex secretario del Tesoro de EEUU; presidente emérito de la Universidad de Harvard

CÍRCULO DEL PRESIDENTE

El Círculo del Presidente de Crisis Group es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.

Canaccord Financial Inc.	Steve Killelea	Harry Pokrant
Mala Gaonkar	George Landegger	Ian Telfer
Frank Holmes	Ford Nicholson & Lisa Wolverton	Neil Woodyer

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

El Consejo Asesor Internacional de Crisis Group está integrado por importantes donantes particulares y corporativos que aportan regularmente a la organización sus consejos y experiencia.

APCO Worldwide Inc.	Seth Ginns	Jean Manas & Rebecca Haile	Shell
Ed Bachrach	Rita E. Hauser	McKinsey & Company	Statoil ASA
Stanley Bergman & Edward Bergman	Sir Joseph Hotung	Harriet Mouchly-Weiss	Belinda Stronach
Harry Bookey & Pamela Bass-Bookey	Iara Lee & George Gund III Foundation	Griff Norquist	Talisman Energy
Chevron	George Keller	Näringslivets Internationella Råd (NIR) – International Council of Swedish Industry	Tilleke & Gibbins
Neil & Sandra DeFeo Family Foundation	Ahmed Khan	Yves Oltramare	Kevin Torudag
Equinox Partners	Faisal Khan	Anna Luisa Ponti & Geoffrey Hoguet	VIVATrust
Fares I. Fares	Zelmira Koch Polk	Michael Riordan	Yapi Merkezi Construction and Industry Inc.
NeematFrem	Elliott Kulick		
	Liquidnet		

ASESORES SENIOR

Los asesores senior de Crisis Group son ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Presidente emérito	Victor Chu	Christine Ockrent	Simone Veil
George Mitchell Presidente emérito	Mong Joon Chung	Timothy Ong	Shirley Williams
HRH Prince Turki al-Faisal	Pat Cox	Olara Otunnu	Grigory Yavlinski
Hushang Ansary	Gianfranco Dell'Alba	Lord (Christopher) Patten	Uta Zapf
Óscar Arias	Jacques Delors	Shimon Peres	Ernesto Zedillo
Ersin Aroğlu	Alain Destexhe	Victor Pinchuk	
Richard Armitage	Mou-Shih Ding	Surin Pitsuwan	
Diego Arria	Gernot Erlor	Cyril Ramaphosa	
Zainab Bangura	Marika Fahlén	Fidel V. Ramos	
Shlomo Ben-Ami	Stanley Fischer	George Robertson	
Christoph Bertram	Malcolm Fraser	Michel Rocard	
Alan Blinken	I.K. Gujral	Volker Rühle	
Lakhdar Brahimi	Max Jakobson	Mohamed Sahnoun	
Zbigniew Brzezinski	James V. Kimsey	Salim A. Salim	
Kim Campbell	Aleksander Kwaśniewski	Douglas Schoen	
Jorge Castañeda	Todung Mulya Lubis	Christian Schwarz-Schilling	
Naresh Chandra	Allan J. MacEachen	Michael Sohlman	
Eugene Chien	Graça Machel	Thorvald Stoltenberg	
Joaquim Alberto Chissano	Barbara McDougall	William O. Taylor	
	Matthew McHugh	Leo Tindemans	
	Miklós Németh	Ed van Thijn	

International Headquarters

Avenue Louise, 149
1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 502 90 38
Fax: +32 2 502 50 38
Email: brussels@crisisgroup.org

Washington Office

1629 K Street NW, Suite 450
Washington DC 20006
United States
Tel: +1 202 785 1601
Fax: +1 202 785 1630
Email: washington@crisisgroup.org

New York Office

420 Lexington Avenue, Suite 2640
New York, New York 10170
United States
Tel: +1 212 813 0820
Fax: +1 212 813 0825
Email: newyork@crisisgroup.org

London Office

48 Gray's Inn Road
London WC1X 8LT
United Kingdom
Tel: +44 207 831 1436
Fax: +44 207 242 8135
Email: london@crisisgroup.org

Moscow Office

Kutuzovskiy prospect 36
Building 41
Moscow 121170 Russia
Email: moscow@crisisgroup.org

Regional & Local Field Offices

Crisis Group also operates from
some 20 different locations in Africa,
Asia, Europe, the Middle East and
Latin America:
See www.crisisgroup.org for details.